



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

ESTUDIO DE LAS MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUESTAS A MENORES INFRACTORES

Autora

Isabel Cardona Miguel

Directora

M^a Ángeles Rueda Martín

Facultad de Derecho

2019-2020



«Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia».

Principio fundamental de las Directrices de Riad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990.

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	6
II. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL DERECHO PENAL DE MENORES..	8
III. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS	9
IV. ACTUAL MARCO NORMATIVO.....	11
1. LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.....	11
2. LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP y de la LORPM, en relación con los delitos de terrorismo.....	12
3. LO 9/2000, de 10 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.....	13
4. LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, y del CC, sobre la sustracción de menores.....	13
5. LO 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del CP.....	14
6. RD 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LORPM.....	14
7. LO 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LORPM.....	15
8. LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP.....	16
V. PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DE LA LORPM	17
1. Principio de responsabilidad penal de los menores.....	17
2. Principio de especialización.....	17
3. Principio de excepcionalidad o intervención mínima	17
4. Principio acusatorio.....	18
5. Principio de oportunidad.....	18
6. Principio de legalidad.....	18
7. Principio del interés superior del menor	19
8. Principio de establecimiento de tramos de edad	19
9. Principio de proporcionalidad.....	20
VI. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS	20
VII. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LA LORPM.....	21
1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS	21

2. ENUMERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS	24
2.1 Medidas privativas de libertad.....	24
2.2 Medidas restrictivas de libertad.....	28
2.3 Medidas privativas de otros derechos.....	28
2.4 Medidas terapéuticas	30
2.5 Medidas instructivas	32
 VIII. ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS EN CUANTO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS	34
1. Evolución de los menores condenados en España y Aragón (2013-2018)	34
2. Tipología y evolución de las infracciones penales cometidas por menores en España y Aragón (2013-2018)	36
3. Evolución de las medidas adoptadas en España (2013 a 2018)	38
4. Medidas adoptadas en España de 2013 a 2018	39
5. Evolución de medidas adoptadas en Aragón (2013 a 2018)	42
6. Medidas adoptadas en Aragón en el periodo de 2013 a 2018.....	43
 IX. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA JURISPRUDENCIA CON RESPECTO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....	46
 X. CONCLUSIONES	50
 XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54



LISTADO DE ABREVIATURAS

AG	Asamblea General
Art.	Artículo
CC	Código Civil
CCAA	Comunidades Autónomas
CDN	Convención de los Derechos de Niño
CE	Constitución Española
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CP	Código Penal
EM	Exposición de Motivos
FGE	Fiscalía General del Estado
INE	Instituto Nacional de Estadística
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LORPM	Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores
LTTM	Ley sobre Tribunales Tutelares de Menores
MF	Ministerio Fiscal
RD	Real Decreto
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
TC	Tribunal Constitucional
UE	Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

El Derecho penal de menores frente al Derecho penal de adultos tiene un carácter especial de responsabilidad, lo que se traduce en un tratamiento distintivo mediante la previsión de un sistema de medidas que se orienta a la prevención especial positiva, a través de la reeducación y resocialización del menor infractor.

La cuestión tratada en este trabajo versa sobre el estudio de este sistema de medidas susceptibles de ser impuestas a menores infractores, contenido en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. El objetivo es aproximarnos a la regulación legal de estas medidas específicas y además ver la realidad práctica en cuanto a su aplicación por el Juez de Menores en el ámbito nacional y aragonés a lo largo de los últimos años.

La razón por la cual se ha elegido este tema viene motivada por el desarrollo en los últimos años de la justicia penal juvenil y por ser una de las materias con gran interés en el contexto social y jurídico-penal en España, existiendo actualmente una intensa preocupación en el espacio de seguridad y justicia por la delincuencia juvenil. Ésta viene abordándose desde hace décadas y se presenta en todas las capas y estratos sociales de todos los países de nuestro entorno. En los últimos años, se ha tenido la percepción de que la delincuencia juvenil se ha incrementado y que los delitos cometidos son cada vez de mayor gravedad. Ante esta situación, los ciudadanos han demandado mecanismos de control mucho más eficaces, al tener la sensación de que los jóvenes infractores gozan de impunidad, al considerar la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores¹ demasiado blanda. Como consecuencia de esta presión e influencia social, el poder legislativo reformó la LORPM en sucesivas ocasiones, creándose nuevas medidas y supuestos de aplicación y endureciéndose algunas de ellas, con la intención de proporcionar una mayor seguridad ciudadana.

Aunque las conductas antisociales juveniles y las medidas aplicables tienen características similares en la mayor parte de la UE, cada ordenamiento jurídico varía en

¹ En adelante: LORPM

función de su cultura y tradición. Las principales diferencias se reflejan a la hora de fijar el límite de edad en cuanto a la responsabilidad penal del menor, su régimen sancionador y la competencia de los tribunales de menores.

Este trabajo se ha estructurado en diversos apartados. En primer lugar, analizamos el concepto y naturaleza del Derecho penal de menores y posteriormente, realizamos un breve recorrido por los antecedentes normativos siguiendo su evolución hasta el día de hoy, la vigente LORPM. Se desarrollan las diferentes características de las posteriores reformas que ha sufrido la Ley. Se exponen los principios sustantivos en los que se inspiran las medidas y en general, todo el Derecho penal de menores y los principios que rigen la ejecución de las medidas. A continuación, se hace un estudio de las medidas recogidas legalmente, definiendo su concepto y naturaleza y analizando su contenido individual. Además, he querido incorporar un apartado sobre la aplicación práctica de las medidas, realizando un análisis de los datos estadísticos para ver gráficamente información relevante como el número de menores condenados, la tipología delictiva de los mismos y las medidas que se han adoptado, todo ello a nivel nacional y de la CCAA de Aragón, entre los años 2013 a 2018². Finalmente, se quiere profundizar con el análisis conceptual de la jurisprudencia con respecto al principio de proporcionalidad y dar nuestra opinión en las conclusiones.

Para la elaboración del trabajo se ha recurrido a la revisión de diversas fuentes bibliográficas, entre ellas manuales, artículos doctrinales publicados en revistas penales y criminológicas, textos normativos y otras fuentes informativas, como jurisprudencia, memorias de la FGE y la consulta de los datos estadísticos proporcionados por el INE.

² Los últimos datos publicados por el INE el día 20/09/2019 corresponden al año 2018, por lo tanto, no se han podido incorporar los datos del año 2019.

II. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL DERECHO PENAL DE MENORES

El Derecho penal de menores integra la potestad punitiva del Estado, y como tal está sometido a los límites recogidos en nuestra Constitución, las tradicionales garantías penales y a la LORPM³. Para poder dar respuesta a la particular tutela que la CE dispensa a la infancia y juventud en sus artículos 39 y 48, se aprueba un ordenamiento jurídico específico con el cual los menores de edad responden por las infracciones penales cometidas. Además, desarrolla en toda su dimensión el principio de igualdad, ya que se les da un trato diferente, por razones justificadas, pues es incomparable la responsabilidad penal de un adulto ya formado respecto a la de un menor, sujeto en pleno proceso de desarrollo madurativo y de poca experiencia.

Se trata de un sector que no se dirige a la generalidad de los ciudadanos sino, únicamente a las personas mayores de 14 y menores de 18 años (art.1.1 LORPM). Y aunque comparte el mismo presupuesto que el Derecho penal adulto, la previa comisión de un delito, difiere en la consecuencia jurídica, pues no se le impondrán penas sino medidas caracterizadas por su flexibilidad en su imposición y ejecución, conectando directamente con el interés superior del menor, principio que guía todo el Derecho de menores.

Podemos definir el Derecho penal de menores como «el conjunto de normas jurídico-positivas que asocian a la comisión de una infracción penal por un menor de edad, una serie de medidas caracterizadas por su contenido educativo, dirigidas al interés superior del menor»⁴.

Las notas que presiden su naturaleza jurídica son las siguientes: a) el Derecho penal de menores regula una auténtica responsabilidad penal, en tanto que le van a interesar los comportamientos llevados a cabo por el menor que supongan un hecho tipificado como delito en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo se valoran toda una serie de circunstancias para la concreción de la medida más adecuada al interés superior del menor, teniendo en cuenta el hecho cometido y también la edad, las circunstancias familiares y sociales y su personalidad (art. 7.3 LORPM); b) la Jurisdicción de Menores

³ Art. 1.2 de la LORPM.

⁴ COLAS TURÉGANO, A., *Derecho Penal de menores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p.50.

puede imponer una medida por la comisión de dicho comportamiento delictivo junto con otras soluciones como la conciliación, reparación, etc, cobrando especial relevancia el principio de intervención mínima; c) el Derecho penal de menores es Derecho público, cuyo protagonista en el ejercicio de la acción penal es el MF y que además es el instructor del procedimiento; d) es un Derecho autónomo en cuanto a la determinación de sus consecuencias jurídicas, mas como parte integrante del sistema penal, toma sus presupuestos del CP y de las leyes penales especiales (art. 1 LORPM); e) tiene la particularidad de que articula un sistema de medidas enfocadas hacia la prevención especial, pues la finalidad primordial del mismo es contribuir al interés superior del menor en su reeducación. Es por ello, que los fines de prevención general y la retribución son rechazados por el legislador, según un relevante sector doctrinal⁵.

Sin embargo, con las últimas reformas, la influencia del interés superior del menor se ha ido neutralizando a favor de otros intereses como los de las víctimas o una mayor proporcionalidad⁶.

En la LORPM coexisten elementos de estricto Derecho penal, con elementos tuitivos y reeducadores propios de la política social de protección de la infancia y juventud. En el marco más amplio de la Justicia de menores, las reglas de Beijing⁷ disponen en su artículo 1.4 que «la justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad».

III. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Su origen se sitúa a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en Illinois (Chicago) en 1899, donde se creó el primer *Children Court*. Desde aquí se fue extendiendo al resto

⁵ SILVA SANCHEZ, J.M., *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*, 2ª edic., B de F, Buenos Aires, 2010, pp.37-47, LUZÓN PEÑA, D.M., *Lecciones del Derecho penal. Parte General*, 2ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p.16, MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte General*, 8ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp.47-51 y MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª edic., Reppertor, Barcelona, 2011, pp.78-79.

⁶ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., pp. 50-52.

⁷ Resolución 40/43 de 29 de noviembre de 1985, de la A.G. de las Naciones unidas, Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores.

del mundo. Los primeros tribunales de menores en Europa surgieron en Alemania en 1907, Inglaterra en 1908, Portugal en 1911, Bélgica en 1912, Francia, Hungría y Suiza en 1913, Austria en 1919, Holanda en 1921, Italia en 1934, etc⁸. En España, el primer antecedente del Juez de Menores fue el Padre de Huérfanos, creado en la ciudad de Valencia en 1337. Se trataba de una institución que se encargaba de recoger a los menores vagabundos y ociosos, huérfanos o desvalidos que pululaban por las calles y se ingresaban en la Casa Común, a fin de que recibieran la instrucción necesaria para aprender un oficio⁹. Esta figura funcionó en Aragón, Valencia y Navarra hasta 1793, año que fue suprimida por Carlos IV y también convivió un tiempo con una casa para niños delincuentes díscolos y abandonados llamada *Los Toribios*, creada en Sevilla en 1723 por el Hermano Toribio de Velasco Alonso. A finales del siglo XIX hay una especial preocupación en la ciudadanía por la desviación social de los menores que propició la aparición de una serie de leyes e instituciones.

El sistema tutelar plasmado en la Ley de 1918 (Ley de Tribunales para niños) y la Ley de 1948 (LTTM), supuso la superación en la que los menores responsables de un delito recibían el mismo trato que los adultos. Este sistema estuvo vigente en España hasta 1992 y se caracterizaba porque eran competentes para juzgar a los menores delincuentes y también para corregir a los irregulares (licenciosos, vagabundos, prostituidos). Se mezclaban las funciones protectoras y de reforma. El menor es un sujeto que no tiene responsabilidad por el hecho cometido o la situación en que se halle, necesitando amparo y protección. El órgano tutelar era de naturaleza administrativa y eran libres a la hora de decidir la medida más adecuada, teniendo una gran importancia sus circunstancias personales, familiares y sociales. No existían garantías penales ni procesales en la búsqueda de la medida que mejor contribuyese a su educación y formación. El proceso que se seguía era totalmente inquisitorial, sin intervención del Fiscal ni de abogado defensor.

⁸ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores y los estándares internacionales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p.70.

⁹ SANCHEZ VÁZQUEZ, V. y GUIJARRO GRANADOS, T., «Apuntes para una historia de las instituciones de menores en España», en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, vol.22, n.º 84, 2002, p.122.

La STC 36/91, de 14 de febrero¹⁰ fue la antesala de la reforma por medio de la LO 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores¹¹, con la finalidad de adaptar la legislación española de menores a la CE, transitando hacia un sistema de justicia o responsabilidad.

IV. ACTUAL MARCO NORMATIVO

1. LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores

La promulgación de esta Ley era una necesidad impuesta por la LO 4/1992, en la Moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor y por el CP en 1995, cuando en su artículo 19 estableció la mayoría de edad penal a los 18 años, fijando así la necesidad de una ley específica para regular la responsabilidad penal de los menores, recogida en la STC 36/91, de 14 de febrero. Se quería alcanzar una normativa en sintonía con los parámetros propios de un moderno Estado de Derecho y con una consolidada doctrina nacional e internacional.

Además de tenerse muy en cuenta la normativa internacional se prestó especial atención a la Ley de Justicia Juvenil alemana de 1990. Se trata de un sistema de justicia o responsabilidad caracterizado por considerar al menor como sujeto responsable a partir de una edad determinada (se establece una edad mínima de 14 años y fija un límite en los 18 años) debiendo responder de sus actos y asumir las consecuencias. Se deben respetar sus derechos procesales y garantías penales teniendo siempre presente el interés superior del menor, con una finalidad educativa, socializadora e integradora de las medidas que se puedan llegar a imponer. Además, la función reformadora le corresponde a un órgano judicial especializado, el Juez de Menores, dejando las funciones protectoras a órganos administrativos en el ámbito de los servicios sociales¹². También se debe tener en cuenta

¹⁰ Último párrafo del Fundamento Jurídico 6º de la STC 36/1991, de 14 de febrero.

¹¹ En adelante: LO 4/1992.

¹² COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., pp. 68-70.

a las víctimas, permitiendo que éstas puedan intervenir en todas las fases del procedimiento.

La LORPM ha sido objeto de varias reformas que han desdibujado sus principios inspiradores, ya que no va a primar el interés superior del menor, su educación y socialización, sino la necesidad de mitigar la alarma social y defender la sociedad. Esto supondrá un acercamiento al Derecho penal de adultos, caminando hacia un modelo de seguridad ciudadana¹³ caracterizado por ignorar las particularidades de la delincuencia de menores y de los conocimientos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, del que son especialmente destinatarios los llamados delincuentes juveniles de gran intensidad¹⁴.

Las reformas de la LORPM van dirigidas a establecer un régimen más gravoso para los menores implicados en delitos terroristas u otros hechos de especial gravedad.

2. LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP y de la LORPM, en relación con los delitos de terrorismo

Esta primera reforma tuvo lugar durante el periodo de *vacatio legis* de la LORPM, antes de su entrada en vigor. Fue motivada por una serie de acontecimientos de violencia callejera y por un gran debate social planteado alrededor de algunos homicidios cometidos por menores de edad, los cuales tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación¹⁵.

Los cambios más significativos que se produjeron fueron los siguientes: a) se introduce la inhabilitación absoluta como nueva medida, asociada a los delitos de terrorismo (arts. 571-580 CP); b) se da un tratamiento punitivo a los menores infractores implicados en hechos delictivos de especial gravedad: homicidio doloso, asesinato, violación, agresiones sexuales y violación agravada y delitos de terrorismo, extendiendo su aplicación cuando exista un delito sancionado en el CP con pena de prisión igual o superior a quince años; c) se agrava el régimen general sancionador para los delitos

¹³ GARCÍA PÉREZ, O., «La reforma de 2006, de la responsabilidad penal de los menores: la instrucción del modelo de seguridad ciudadana», en *Revista político-criminal* A 1-5, nº5, 2008, p.18.

¹⁴ FEIJOO SÁNCHEZ, B., DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, J. y POZUELO PÉREZ, L., *Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Thomson-civitas, Cizur Menor, Navarra, 2008, p.55.

¹⁵ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p.129.

mencionados con anterioridad, dejando sin efecto la facultad de elección de medida que el artículo 7.3 de la LORPM otorgada al Juez atendiendo no solo a los hechos sino especialmente a las particularidades personales del menor. Concretamente, se adoptaba obligatoriamente la medida de internamiento en régimen cerrado y se aumentaba su duración. Si el menor responsable tenía más de 16 años, la duración del internamiento sería de uno a ocho años además de añadir la medida de libertad vigilada hasta un máximo de cinco años. Sin embargo, si tenía menos de 16 años, el internamiento duraría de uno a cuatro años junto a la medida de libertad vigilada de hasta tres años. El internamiento podía incluso llegar hasta los diez años o cinco años, según las características anteriores, en los casos de concurso y en caso de ser condenado por un delito de terrorismo, se le imponía la medida de inhabilitación absoluta; d) se limitó la posible modificación, sustitución o suspensión de la medida al cumplimiento de la mitad de duración del internamiento; e) se excepciona de la aplicación de la LORPM a los mayores de 21 años autores de alguno de estos delitos; f) se atribuye al Juzgado Central de Menores la competencia para enjuiciar los delitos de terrorismo y la ejecución de las medidas, pudiendo llevarse a cabo mediante Convenio con las CCAA.

3. LO 9/2000, de 10 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Al igual que la anterior reforma, esta segunda modificación se produjo antes que la LORPM adquiriera vigencia. Se atribuye a las Audiencias Provinciales las competencias que venían ejerciéndose por las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia para el conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Menores y, además dejó en suspenso durante dos años la posibilidad de aplicar la LORPM a los jóvenes de entre 18 y 21 años. Reguló expresamente la situación de los menores de 18 años sometidos a prisión preventiva, determinando su excarcelación y su traslado a un centro de reforma.

4. LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, y del CC, sobre la sustracción de menores

Este texto no modificó el contenido de la LORPM, sino que se limitó a volver a suspender hasta el 1 de enero de 2007 la aplicación de la LORPM a los infractores de entre 18 y 21 años.

La razón principal de este aplazamiento sigue siendo los costes económicos, insuficientes equipamientos humanos y materiales existentes para hacer frente al enjuiciamiento de los jóvenes¹⁶.

5. LO 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del CP

Esta reforma trajo consigo la modificación de los artículos 8 y 25 de la LORPM, los cuales regulan aspectos importantes como el principio acusatorio y la participación del perjudicado u ofendido en el proceso penal de menores. Se produce un giro radical con respecto a la intervención de la víctima, al introducir el instituto procesal de la acusación particular en el proceso regulado en la LORPM, reforzando considerablemente la posición de la víctima y el principio acusatorio, que deja de estar conferido únicamente al MF en régimen de monopolio, al añadirse la figura de la acusación particular¹⁷.

Además, manifestó el avance de futuras reformas «una vez evaluada la aplicación de la ley, se impulsarán medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad [...] posibilitando prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios»¹⁸. Todo ello para tranquilizar las ansias represivas de una parte de la población.

6. RD 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LORPM

En la EM de la LORPM se determina la necesidad de la creación de un Reglamento para desarrollar diferentes materias.

¹⁶ BARQUÍN SANZ, J. y CANO PAÑOS, M.A., «Justicia penal juvenil en España: una legislación a la altura de los tiempos», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª Época, nº 18, 2006, p.72.

¹⁷ BARQUÍN SANZ, J. y CANO PAÑOS, M.A., «Justicia penal juvenil en España...», *cit.*, p.73.

¹⁸ Disposición Adicional 6ª de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del CP.

El mismo fue muy esperado por todos los operadores jurídicos, pues necesitaban de un instrumento para poder aplicar la Ley. Las materias que desarrolla son tres: la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico, la ejecución de las medidas cautelares y definitivas y el régimen disciplinario de los centros de internamiento.

7. LO 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LORPM

Se trata de una importante y extensa reforma de la LORPM puesto que afecta a un gran número de artículos. La misma ha sido calificada como una reforma claramente represiva, justificada con el pretexto de «un aumento considerable de los delitos cometidos por menores, lo que ha causado una gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. Si bien, debe reconocerse que afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social»¹⁹. Las características más significativas son: a) se establece una nueva medida consistente en la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus familiares u otras personas que determine el juez; b) ampliación de la duración de la medida cautelar de internamiento de tres meses a seis meses prorrogables por tres meses más; c) nueva configuración de la medida de internamiento terapéutico, diferenciando tres modalidades: abierto, semiabierto y cerrado; d) se revisa el régimen de imposición, ejecución y refundición de las medidas, en general, produciéndose un endurecimiento en las mismas: la duración máxima hasta los quince años pasa de dos a tres años y la duración máxima hasta los diecisiete años pasa de cinco a seis años; e) ampliación de los supuestos en que se puede llegar a imponer la medida de internamiento en régimen cerrado, siendo aplicable a cualquier delito castigado con pena grave, con independencia de si la pena es privativa de libertad o de cualquier otra naturaleza, ampliando también la duración del mismo; f) se suprime la posibilidad de aplicar la LORPM a los jóvenes mayores de 18 años; g) la medida de internamiento en régimen cerrado pasa a cumplirse en centro penitenciario cuando el menor cumpla 21 años, salvo que excepcionalmente proceda sustituir o modificar; además, si el juez

¹⁹ Exposición de Motivos de la LO 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LORPM.

considera que no se han cumplido los objetivos propuestos en la sentencia, podrán pasar a centros penitenciarios a partir de los 18 años; h) se establece un enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles, similar al sistema establecido en la LECr; i) se refuerza la atención y reconocimiento de los derechos de las víctimas; j) se determinan en el proceso de menores las nuevas competencias del Secretario Judicial.

Las estadísticas oficiales demuestran que no es cierto que el número de delitos cometidos por menores hubiesen aumentado y las razones legales de esta reforma están más vinculadas a una reconsideración de la respuesta penal frente a las infracciones más graves, las carencias por parte de las Administraciones Públicas competentes para hacer frente a la investigación, enjuiciamiento y ejecución de las infracciones cometidas por los jóvenes y a la falta de infraestructuras para la ejecución de las medidas de internamiento o a subsanar algunos defectos técnicos de la norma²⁰.

8. LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP

Esta ley ha modificado el CP y la LECr, sin hacer referencia alguna a la LORPM. Sin embargo, la reforma del CP ha tenido una incidencia importante en algunos aspectos del Derecho penal de menores, ya que se han suprimido las faltas como categoría penal, lo que venía a representar un 50% de las infracciones por las que eran sancionados los menores²¹.

Esto ha supuesto dos consecuencias en la Ley, una de alcance terminológico y otra que afecta a la punición de estos delitos leves que, tras esta reforma, no cabe imponer la medida de permanencia de fin de semana, ya que el legislador castiga la mayoría de estos delitos leves con penas de multa, por lo que no estando prevista la privación de libertad para los adultos, tampoco va a ser posible para los menores, por así establecerlo el artículo 8 de la LORPM.

También ha afectado a la prescripción de los delitos, ya que algunas conductas consideradas como delitos menos graves han pasado a considerarse delitos leves, quedando sujetos al plazo de prescripción de tres meses para las faltas.

²⁰ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p. 144.

²¹ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., pp. 146-147.

V. PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DE LA LORPM

1. Principio de responsabilidad penal de los menores

El artículo 19 del vigente CP, fija la mayoría de edad penal en los 18 años y exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Para responder a esta exigencia se aprueba la LORPM, si bien lo dispuesto en este punto en el CP debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. En segundo lugar, el límite mínimo a partir del cual se puede exigir responsabilidad penal son los 14 años²².

2. Principio de especialización

Los sistemas de justicia juvenil requieren del establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos, pero además la especialización requiere de capacitación específica para todas las personas que trabajan en el sistema²³. Todos los actores que intervienen en el procedimiento de menores son: jueces, fiscales, abogados, equipos técnicos, instancias policiales y profesionales del sistema de ejecución de medidas.

3. Principio de excepcionalidad o intervención mínima

En la mayoría de las legislaciones, este principio de intervención mínima se manifiesta potenciando el principio acusatorio y el principio de oportunidad, mediante la despenalización de algunas conductas de escaso reproche social. Para ello se debe intentar resolver pacíficamente el conflicto e intentar adoptar medidas para reducir al mínimo el contacto de los menores con el sistema de justicia juvenil. La privación de libertad debe utilizarse como último recurso y de manera excepcional por el menor tiempo posible.

²² Apartado 4º de la Exposición de Motivos de la LORPM.

²³ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p. 277.

4. Principio acusatorio

El Juez de Menores es el garante de los derechos individuales de todas las partes que están implicadas en el proceso. Se atribuye la instrucción del procedimiento al MF y al Juez de Menores la resolución. Éste no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Fiscal o por el acusador particular (art. 8 LORPM).

5. Principio de oportunidad

Este principio permite al MF ejercitar las acciones penales que considere oportunas, desistir de la incoación o terminar anticipadamente un procedimiento que ya se está tramitando, archivando con ello la causa, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible. El fundamento del desistimiento de la incoación radica en que el hecho acontecido es un delito menos grave, aislado o de carácter episódico y por ello, su entorno puede ofrecer una respuesta correctora, no justificando una intervención más grave como la procedente del sistema penal juvenil²⁴. También se puede llegar a dar en otros momentos del procedimiento, como el sobreseimiento por conciliación o reparación (art. 19 LORPM), por conformidad (arts.32 y 36 LORPM), por suspensión de la ejecución del fallo (art. 40 LORPM) o incluso puede dejar sin efecto o sustituir la medida impuesta durante la ejecución (art. 51 LORPM).

6. Principio de legalidad

El artículo 40.2 de la Convención de los Derechos de Niño²⁵ manifiesta que el sistema de justicia juvenil solo puede intervenir ante conductas previamente tipificadas y sancionadas por una norma penal. Así la LORPM en su artículo 1 establece que la misma se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales, quedando fuera cualquier otro tipo de conductas.

²⁴ ALASTUEY DOBÓN, M.C., «Alternativas al procedimiento y a la ejecución de las medidas en la LORPM», coord. Boldova Pasamar (ed.), El nuevo Derecho penal juvenil: Jornadas sobre la nueva ley penal del menor, en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública*, nº5, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2002, pp. 203-204.

²⁵ En adelante: CDN

El artículo 8 de la LORPM manifiesta que queda prohibido imponer una medida más restrictiva o de mayor duración que la solicitada por la acusación, persiguiendo con ello que el menor no se encuentre en situación de indefensión. Además, en su apartado segundo, aparece la igualdad de trato de menores y adultos, manifestando que la duración de las medidas privativas de libertad no podrá exceder en ningún caso, del tiempo que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto hubiera sido un adulto.

Y en el artículo 43 de la LORPM se recoge la garantía jurisdiccional, al expresar que no podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme y de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.

7. Principio del interés superior del menor

Este principio fundamental está recogido de manera expresa en el artículo 3.1 de la CDN, siendo una consideración primordial para tener en cuenta en todas las decisiones que sean adoptadas en el contexto de la administración de justicia de menores.

En numerosas ocasiones el legislador apela a dicho principio en el marco de las actuaciones que se han de realizar con relación al menor o a la hora de decidir, aplicar o ejecutar una medida²⁶. La protección de este interés superior del menor conlleva que los tradicionales objetivos del sistema penal, la represión o el castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restaurativa para menores delincuentes. Esto conlleva que el análisis de los casos debe llevarse a cabo de forma individual, ya que cada menor tiene necesidades diferentes, es por lo que se requiere procesos complementarios de valoración y una ponderación de todas las circunstancias personales, familiares y sociales. Además, debemos escuchar la opinión del menor en todas las etapas del proceso, incluyendo en la ejecución de las medidas impuestas²⁷.

8. Principio de establecimiento de tramos de edad

La LORPM distingue dos tramos de edades a efectos sancionadores y de aplicación de medidas. Estos tramos corresponden en primer lugar, a menores infractores que tengan entre 14 y 16 años y, en segundo lugar, los que tengan entre 16 y 18 años. En este segundo tramo se fija la oportunidad de aplicar un régimen más estricto, en cuanto al tipo de

²⁶ COLÁS TURÉGAÑO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p.86.

²⁷ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., pp. 272-273.

medidas y su duración, cuando se han cometido delitos especialmente graves y además a la posible intervención del ofendido en el procedimiento, que sólo se personará en el caso de haber cumplido los 16 años.

9. Principio de proporcionalidad

En el Derecho penal juvenil este principio opera como un criterio garantista, en el que la respuesta punitiva no debe nunca sobrepasar la medida de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor, impidiendo establecer medidas más graves o de duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si de un adulto se tratase²⁸.

Se convierte en un principio clave para asegurar el respeto al principio de intervención mínima y la protección de la libertad o autonomía personal a la que tienen derecho los ciudadanos²⁹.

Las exigencias de proporcionalidad recogidas en la LORPM se encuentran recogidas en varios artículos. El artículo 7.3 fija los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la medida, teniendo en cuenta el hecho cometido. En el artículo 10 cuando menciona los supuestos agravados, pero, sobre todo, en el artículo 8.2, en el que se fija como límite a la duración de las medidas, la pena que se hubiera impuesto al mayor de edad por ese mismo hecho³⁰.

VI. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

El artículo 6 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LORPM³¹, concreta estos principios, a los que deberán sujetarse los profesionales, organismos e instituciones que intervengan en la ejecución de las medidas:

- a) prima el interés superior del menor sobre cualquier interés concurrente;
- b) respeto del libre desarrollo de la personalidad del menor;

²⁸ STC 36/91 de 14 de febrero.

²⁹ ZARATE CONDE, A. y GONZÁLEZ CAMPO, E., *Derecho penal. Parte General*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2019, p.32.

³⁰ Ver apartado IX: Análisis conceptual de la jurisprudencia con respecto al principio de proporcionalidad, pp.46-49.

³¹ En adelante: RD

- c) se informa al menor de los derechos que le corresponden en cada momento y debe ser asistido de manera adecuada para que pueda ejercerlos;
- d) se aplican programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros;
- e) las actuaciones deben ser adecuadas a la edad, personalidad y circunstancias personales y sociales de los menores;
- f) estas actuaciones deben darse prioritariamente en el propio entorno familiar y social, siempre que no sea perjudicial para el menor. Se utilizarán en la ejecución de las medidas los recursos normalizados comunitarios;
- g) se fomenta la colaboración de los padres, tutores o representantes legales durante la ejecución de las medidas;
- h) las decisiones que afecten o puedan afectar a la persona se deben adoptar de forma interdisciplinaria;
- i) confidencialidad, reserva y ausencia de injerencias innecesarias en la vida privada de los menores o en la de sus familias, en las actuaciones que se lleven a cabo;
- j) coordinación y colaboración con los organismos de la propia o diferente Administración, que intervengan con menores y jóvenes, especialmente los que tienen competencias en educación y sanidad.

Existe un doble nivel de competencias en su ejecución: administrativa y judicial. La ejecución de las medidas impuestas es competencia de las CCAA en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la LORPM, y su control legal compete al mismo Juez de Menores que haya dictado la sentencia.

VII. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LA LORPM

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS

La imposición de una medida se concibe como último recurso debido a la flexibilidad del propio sistema punitivo. Esto se manifiesta con singular claridad en las múltiples posibilidades otorgadas a lo largo del proceso para poner fin al mismo, sin imposición de medida o con una propuesta de reparación. Las razones que justifican esta

flexibilidad son, según TAMARIT SUMALLA y COLÁS TURÉGANO «la necesaria observancia del interés del menor, la vocación educativa del sistema, la ponderación de los costes que el proceso puede tener para el menor, el diferente sentido del transcurso del tiempo para quienes se encuentran en un acelerado proceso de maduración persona y la mayor comprensión social ante soluciones menos formalizadas»³².

Existe un amplio catálogo de medidas recogidas en el artículo 7 de la Ley, lo que permite al juzgador encontrar aquella medida que mejor se adapta a las necesidades del menor, teniendo en cuenta el fin de prevención especial con un complemento educativo³³. La exigencia de atender al interés superior del menor, potenciando su reinserción y responsabilización, hace que la justicia de menores no haya prefijado las medidas que corresponden a cada delito, permitiendo adaptar esa respuesta educativa a las necesidades y circunstancias personales, sociales, familiares o de edad del menor, y hacerlo de forma proporcional al delito cometido y sus circunstancias (arts. 7.3 y 39.1 LORPM).

Según un sector de la doctrina, no se trata de penas, ya que, aunque tienen su fundamento en la culpabilidad del sujeto, no son totalmente proporcionales a la gravedad del hecho cometido. Tampoco son medidas de seguridad puesto que no se imponen en función de la peligrosidad del individuo. Según JIMENEZ DÍAZ, para BUENO ARÚS son medidas pedagógicas o correccionales y, sin embargo, para otros autores como MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, las medidas deben ser consideradas dogmáticamente como penas, ya que no se basan en la peligrosidad del menor, sino en la culpabilidad, aunque ésta presente algunas peculiaridades³⁴. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ también considera que nos encontramos ante auténticas penas juveniles donde el legislador ha pretendido ser políticamente correcto evitando el uso del término pena, lo que ha conducido a una situación de auténtico fraude de etiquetas³⁵. BOLDOVA

³² TAMARIT SUMALLA, J.M., «El nuevo derecho penal de menores: ¿creación de un sistema penal menor?», en *Revista Penal*, nº8, 2001, pp.83-84 y COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., pp.111-112.

³³ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 220.

³⁴ JIMÉNEZ DÍAZ, M.J., «Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 17-19, 2015, pp.20-21.

³⁵ SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., *El sistema de medidas en la ley penal del menor y las alternativas al proceso*, Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar: ¿qué hacer con los menores delincuentes?, coord. Jorge Barreiro y Feijoo Sánchez, Barcelona, 2007, pp.74-75.

PASAMAR manifiesta que las medidas de la LORPM pueden ser medidas de seguridad y medidas con carácter sancionador-educativo, dependiendo de si disponen de carácter terapéutico en el caso de los inimputables y de si tienen naturaleza penal para los menores imputables. Aunque eso sí, son *sui generis*, tanto por su contenido como por su determinación y ejecución³⁶, lo que las distingue de las penas previstas en el CP.

En una línea de integrar la educación y la sanción, la LORPM hace referencia a la naturaleza sancionadora educativa de las medidas. Esta Ley viene a establecer un sistema de exigencia de responsabilidad jurídica a los menores infractores, pero precisamente por esta circunstancia, por encontrarnos ante un sujeto no formado en pleno proceso de desarrollo hacia la edad adulta, la intervención presenta características singulares, profundizando en el componente educativo.

La naturaleza sancionadora obliga a imponer una sanción a los delitos que se han cometido, evitando la sensación de impunidad y fomentando la responsabilidad del menor; y teniendo en cuenta la gravedad, se evita que se impongan medidas demasiado restrictivas de derechos por delitos de escasa entidad. Esta respuesta sancionadora debe tener un carácter educativo para el menor, y es por lo que el juzgador, a la hora de elegir una medida tiene muy en cuenta, además de la naturaleza de los hechos, sus circunstancias individuales y sociales³⁷.

Así pues, el sentido de las medidas en la justicia de menores es facilitar la reeducación del menor, promoviendo su responsabilidad y su reinserción. Su fin debe ser de prevención especial, guiando con ello la ejecución de las medidas.

³⁶ BOLDOVA PASAMAR, M.A., *El Sistema de aplicación de las sanciones en el Derecho penal de los menores tras la LO 8/2006, de 4 de diciembre*, en Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (eds.), *Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar, ¿Qué hacer con los menores delincuentes?*, Atelier, Barcelona, 2007, p.95.

³⁷ FERNÁNDEZ MOLINA, E. y BERNUZ BENEITEZ, M.J., *Justicia de Menores*, Síntesis, Madrid, 2018, p.105.

2. ENUMERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS

La LORPM contiene un amplio catálogo de medidas de diversa naturaleza y gravedad (art.7.1) que pueden ser aplicadas de forma autónoma o como accesorias de otras, facilitando los procesos de reeducación del menor. El legislador no realiza ningún tipo de clasificación, no llega a distinguir, en función de la gravedad de las medidas, entre medidas educativas, disciplinarias y pena juvenil, como sucede en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno³⁸. No obstante, podemos clasificarlas en función de la mayor o menor restricción de derechos:

2.1 Medidas privativas de libertad

A) Internamiento

Se trata de la medida más grave que puede imponerse al menor al afectar a su libertad ambulatoria. Éste encuentra su razón de ser en la mayor peligrosidad del sujeto que se manifiesta en la naturaleza grave de los hechos cometidos y que se caracterizan habitualmente por la violencia, intimidación o peligro para las personas³⁹.

Al tratarse de la medida más grave que puede llegar a imponerse y teniendo en cuenta el principio de intervención mínima, debe reservarse para los supuestos de mayor gravedad, tal como dispone el artículo 37 b) de la CDN «la prisión de un niño se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda». La duración no excederá del límite máximo general de dos años (art.9.3 LORPM). Sin embargo, en el régimen cerrado podrá aumentarse la duración en el caso de tratarse de delitos de especial gravedad, que dependiendo del tramo de edad en el que se encuentre el infractor, durará hasta tres años en sujetos de 14 y 15 años y hasta seis años en sujetos de 17 y 18 años (art.10.1 LORPM). Además, si se trata de determinados delitos como puede ser el homicidio o asesinato, la duración máxima puede llegar a los cinco años en menores de 14 o 15 años y de ocho años

³⁸ SANZ HERMIDA, A.M., «La responsabilidad penal de los menores en derecho español», en *Revista Internacional de Derecho Penal*, vol.75, 2004, p.308.

³⁹ Exposición de Motivos de la LORPM.

para los menores de 16 o 17 años. La Ley no contempla ningún límite mínimo de duración de esta medida.

El apartado segundo del artículo 7 de la Ley establece que el internamiento consta de dos periodos, el primero se lleva a cabo en el centro correspondiente y el segundo en régimen de libertad vigilada. La extensión de cada periodo es fijada por el juez en la sentencia, con base a los informes del equipo técnico y dentro de los límites del artículo 9 de la LORPM.

El objetivo de esta medida es configurar un ambiente adecuado para que el menor infractor pueda reorientar las condiciones que han guiado ese comportamiento.

Se contemplan tres modalidades autónomas en función de la mayor o menor restricción de libertad:

a) Internamiento en régimen cerrado

Es la medida más grave contemplada en el artículo 7.1 a) de la LORPM y artículo 24 del RD, el menor residirá en el centro y desarrollará en el mismo la totalidad del proyecto educativo, laboral y de ocio, planificadas en el programa individualizado de ejecución de la medida. Esta medida se reserva para los hechos de mayor gravedad y en el artículo 9 de la Ley se limita su imposición a: a) hechos tipificados como delito grave en el CP o leyes especiales; b) delitos menos graves si en su ejecución se ha empleado violencia, intimidación o se ha generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas; c) delitos cometidos en grupo o casos en que el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades. Este último punto ha tenido múltiples críticas por la doctrina⁴⁰, pues confunde lo que puede ser una banda juvenil organizada con lo que es la forma habitual de actuar de los menores, y según SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ supone introducir una agravante general que no existe en el Derecho penal de adultos, sin que este

⁴⁰ GARCÍA PÉREZ, O., manifiesta que la actuación en grupo no supone ningún índice de mayor peligrosidad que justifique esta reacción, siendo una forma de actuar a estas edades; VIANA BALLESTER afirma que la indefinición de la fórmula empleada es contraria a la taxatividad consustancial del principio de legalidad, en MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p.327.

justificado un tratamiento particularmente gravoso que resultaría contrario a los principios de proporcionalidad e igualdad⁴¹.

Además, deberá imponerse obligatoriamente cuando el delito cometido sea por homicidio, asesinato, violación, agresión sexual cualificada, delitos de terrorismo o aquellos delitos castigados con pena de prisión igual o superior a quince años (art.10.2 LORPM), quedando excluido para las acciones u omisiones imprudentes (art.9.4 LORPM).

b) Internamiento en régimen semiabierto

Esta medida se encuentra recogida en el artículo 7.1 b) de la LORPM y artículo 25 del RD, el menor residirá en el centro estando sujeto al programa y régimen interno del mismo, pero podrá realizar fuera del mismo algunas o algunas de las actividades del proyecto educativo, laboral y de ocio, teniendo contacto con personas e instituciones de la comunidad. La realización de las actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas y acordar que las mismas se realicen dentro del centro, permitiendo que temporalmente, pueda tener un contenido muy similar al régimen cerrado. Según MONTERO HERNANZ, para algunos autores como OLAIZOLA NOGALES, POZUELO PÉREZ y FEIJOO SÁNCHEZ, este último inciso parece dar a entender que tanto el internamiento en régimen cerrado como en régimen semiabierto, son dos formas de cumplimiento de una misma medida⁴².

c) Internamiento en régimen abierto

Esta medida está recogida en el artículo 7.1 c) de la LORPM y en el artículo 26 del RD, los menores llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el

⁴¹ SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «La reforma de la ley penal del menor por la LO 8/2006», en *Revista Jurídica de Castilla y León*, nº15, 2008, p.31; MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p.327 y COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 225.

⁴² MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., p.335.

centro como domicilio habitual, estando sujeto, por tanto, al programa y régimen interno del mismo. Lo que caracteriza a esta medida de internamiento frente a las demás, es que el menor como norma general, debe permanecer en el centro como mínimo ocho horas y debe pernoctar obligatoriamente en el centro de internamiento⁴³.

Debe aportar al menor un marco de educación próximo al normalizado además de llevar a cabo controles de acompañamiento y de las obligaciones escolares. SOUTO critica que la duración máxima de las medidas sea idéntica tanto para los regímenes abierto y semiabierto como para otras medidas menos graves, lesionando así el principio de proporcionalidad⁴⁴.

B) Permanencia de fin de semana

Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 g) de la LORPM y artículo 28 del RD, las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro específico para menores infractores hasta un máximo de treinta seis horas, entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a tareas socio-educativas asignadas por el Juez de Menores, fuera del lugar de permanencia.

Su aplicación debe ir acompañada de un programa individualizado ajustado a las necesidades del menor. COLAS TURÉGANO manifiesta la posibilidad de poder cumplir la medida otros días de la semana, tal como ocurría con la desaparecida pena de arresto de fin de semana para los adultos, al concurrir razones que aconsejen su adopción otros días de la semana. Sin embargo, dada la flexibilidad del propio sistema, el Juez podría elegir otra medida que mejor se adapte a sus necesidades⁴⁵.

Se trata de la única medida privativa de libertad aplicable a las faltas, generándose discrepancias en la jurisprudencia en cuanto a su aplicación. Para

⁴³ ORTEGA NAVARRO, R.C., *El Régimen Jurídico del menor privado de libertad en los centros de internamiento de menores infractores*, Thomsonreuters Aranzadi, Navarra, 2018, p.52.

⁴⁴ SOUTO, M.A., «Internamientos penales de menores en la LORPM y su Reglamento de 30 de julio de 2004», en *Anuario de Derecho y Ciencias penales*, vol. LVII, 2004, p.93.

⁴⁵ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., pp. 226-227.

algunos Juzgados es aplicable tanto en centro como en el domicilio, pero para otros sólo sería la modalidad de permanencia en el domicilio⁴⁶.

2.2 Medidas restrictivas de libertad

A) Libertad vigilada

Es una de las medidas más aplicadas debido a su versatilidad. Consiste en un seguimiento intensivo de la actividad del menor, acompañado en su caso, del cumplimiento de alguna de las reglas de conducta manifestadas en el artículo 7.1 h) de la LORPM. Ésta puede darse como medida principal, medida cautelar (art. 28.1), como segundo periodo de todos los internamientos (art.7.2) y como mecanismo para controlar la suspensión (art.40.2 c)).

Con esta medida, el menor infractor queda sometido a vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el objetivo de adquirir las habilidades, capacidades, y actitudes necesarias para su correcto desarrollo personal y social. Además, el menor deberá cumplir en ese periodo, las obligaciones y prohibiciones que el juez le haya podido imponer⁴⁷. Una de sus principales ventajas es que permite mantener al menor en su entorno habitual, por lo que se evitan problemas de desarraigo.

2.3 Medidas privativas de otros derechos

A) Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que determine el juez

Esta medida impide al menor acercarse a ellos en cualquier lugar donde éstos se encuentren (domicilio, centro docente, lugar de trabajo) y también impide comunicarse con ellos por cualquier medio (informático, escrito, verbal o visual).

⁴⁶ SJM Valladolid, de 11 de junio, 128/2014 y SAP Guipúzcoa (Sección 6ª), de 13 de marzo, 59/2015, respectivamente.

⁴⁷ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 229.

B) Prestaciones en beneficio de la comunidad

Esta medida debe imponerse con el consentimiento del menor (art. 25 CE), debiendo realizar las actividades no retributivas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación precaria. Se pretende potenciar los efectos beneficiosos de la actividad laboral.

La LORPM no regula prácticamente nada en cuanto a su ejecución, siendo el RD el que detalla la ejecución y características en su artículo 20. Será la Entidad Pública encargada de la ejecución de la medida, la que proporcione las actividades no retributivas, que deberán estar relacionadas con la naturaleza del bien jurídico lesionado, no podrán atentar contra la dignidad del menor y no estarán supeditadas a la consecución de intereses económicos. Las características son: a) no son retributivas, aunque podrá ser indemnizado por la entidad a la cual se haga la prestación, en los gastos de transporte y manutención; b) gozará de la misma protección en materia de la Seguridad Social y Riesgos Laborales cuando tenga la edad legal requerida y en caso de no tener dicha edad, se le garantizará una cobertura suficiente; c) cada jornada no podrá exceder de cuatro horas diarias si el menor es menor a dieciséis años, ni de ocho horas si es mayor; d) flexibilidad en la ejecución, haciéndola compatible con las actividades diarias del menor; e) el profesional designado deberá entrevistarse con el menor para conocerlo mejor y determinar la actividad más adecuada; f) el programa de ejecución será individualizado para cada menor; g) en caso de que el menor no aceptase las actividades propuestas o condiciones y no hubiese otras actividades disponibles adecuadas a sus aptitudes personales, se pondrá en conocimiento del Juez de Menores.

C) Privación de determinados derechos

Se le priva al menor del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a su obtención, de las licencias administrativas para la caza o uso de cualquier tipo de armas. Esta medida puede imponerse como principal o accesoria, en caso de que el ilícito se haya cometido utilizando un ciclomotor, vehículo a motor o un arma.

D) Inhabilitación absoluta

Fue introducida por la LO 7/2000, como medida a imponer a los menores infractores por delitos de terrorismo, pero con la reforma posterior de la LO 8/2006, su aplicación se extendió a cualquier delito cometido por un menor de edad. Produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida. Su imposición es obligatoria cuando el menor tiene 16 o 17 años y ha sido condenado por un delito de terrorismo (art. 10.3 LORPM).

Medida que fue muy criticada por contener el mismo contenido que la pena prevista para el adulto y no responder a ningún criterio educativo⁴⁸.

2.4 Medidas terapéuticas

Nos encontramos ante auténticas medidas de seguridad, cuyo fundamento no es la culpabilidad sino la peligrosidad del menor, manifestada en la comisión de un hecho delictivo. El menor al cuál se le apliquen estas medidas debe estar en una situación de inimputabilidad plena o semiplena⁴⁹.

A) Internamiento terapéutico

Existen tres modalidades de internamiento terapéutico distinguidas por la LO 8/2006: cerrado, semiabierto y abierto. Este internamiento se prevé para aquellos casos en los que los menores, ya sea por su adicción al alcohol u otras drogas, por disfunciones significativas en su persona, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programación terapéutica. En los centros de esta naturaleza, se prestará atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, dependencia a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o

⁴⁸ ORNOSA FERNÁNDEZ, M.R., *Derecho penal de menores*, 4ª edic., Bosch, Barcelona, 2007, p.215 y COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p.233.

⁴⁹ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 234.

sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad (art. 7.1 d) LORPM).

Esta medida se impondrá aisladamente en caso de inimputabilidad plena del menor pero también puede ir acompañada de otras medidas en supuestos de semiinimputabilidad (eximente incompleta o atenuante analógica). Incluso puede aplicarse a menores con problemas psíquicos o drogodependientes que no tengan afectada su imputabilidad en el momento de la comisión delictiva⁵⁰.

Su efectividad depende a su vez de la existencia de centros específicos, pues con mucha frecuencia, se debe recurrir a los servicios sociales y sanidad pública, caracterizados por su gran afluencia y por carecer de la necesaria especialización en la materia⁵¹.

Cuando el menor rechace un tratamiento de deshabituación (art. 27.3 LORPM), el juez deberá aplicar otra medida adecuada a sus circunstancias personales.

B) Tratamiento ambulatorio

Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida puede aplicarse sola o como complemento de otra medida de las previstas en este artículo. Se distinguen dos tipos de medidas: la psicológica y la de deshabituación a alguna adicción de las anteriormente citadas⁵².

⁵⁰ GONZÁLEZ TASCÓN, M., *El tratamiento de la delincuencia juvenil en la UE. Hacia una futura política común*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.215 y FEIJOO SÁNCHEZ, B., DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, J. y POZUELO PÉREZ, L., *Comentarios a la Ley reguladora...*, cit., p.139.

⁵¹ LANDROVE DÍAZ, G., *Introducción al Derecho penal de menores*, 2ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p.78; y ORNOSA FERNÁNDEZ, M.R., *Derecho penal de menores*, cit., p.210.

⁵² BLANCO BAREA, J.A., «Responsabilidad penal del menor: Principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho penal español», en *Revista de Estudios Jurídicos*, 2ª Época, nº8, 2008, p.24.

Si el menor rechazase un tratamiento de deshabitación, el juez deberá aplicar otra medida adecuada a sus circunstancias personales (art. 7.1 e) LORPM y art.16 RD).

2.5 Medidas instructivas

A) Asistencia a centro de día

Se trata de una medida a ejecutar en medio abierto dónde el menor residirá en su domicilio habitual y acudirá a un centro, plenamente integrado en la comunidad, para realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio (art. 7.1 f) LORPM). Con ello se proporciona al menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, llevándose a cabo actividades socio-educativas que compensen las carencias del ambiente familiar y/o social. Son muchas las consecuencias positivas, ya que se evita la separación del menor de su entorno habitual y se refuerzan distintas áreas formativas.

Esta medida se podría haber integrado junto a la libertad vigilada o la realización de tareas socio-educativas, ya que todas ellas implican un control y seguimiento del menor infractor, de hecho, podían haberse refundido las tres en una única medida⁵³.

B) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo

La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, debidamente seleccionados por una entidad pública para orientarle en su proceso de socialización (art. 7.1 j) LORPM). Se suele dar en los casos en que el núcleo familiar original ha fracasado en la socialización primaria del niño y se da una conexión entre la conducta delictiva y la inoperancia del núcleo familiar⁵⁴. Por ello, se aparta al menor de su familia

⁵³ GÓMEZ HIDALGO, J.I., «Estudio de las medidas establecidas en la LORPM», en *Revista Jurídica Baylio*, nº4, 2014, p.76.

⁵⁴ COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 237.

temporalmente, no llegando nunca a romper los vínculos familiares, necesitando ser aceptada por el menor y por su familia⁵⁵.

C) Realización de tareas socio-educativas

Se trata de una medida que se ejecuta en medio abierto dónde la persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social (art. 7.1 l) LORPM). Esta medida tiene una doble finalidad ya que puede ser utilizada como medida autónoma o formar parte de un programa de actuación más complejo, favoreciendo la reinserción social del menor. Estas actividades pueden consistir en asistencia a talleres de aprendizaje, aulas de educación, cursos de empleo, etc.

Se configura como una de las consecuencias que más expectativas despierta, si bien no puede olvidarse que es, a la par, una de las que más frustración puede generar, ya que su puesta en práctica requiere una dotación de medios que de otra forma convertirían sus previsiones en un brindis al sol⁵⁶.

D) Amonestación

Se trata de una medida de represión llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en un futuro (art. 7.1 m) LORPM). Es la única medida que ejecuta directamente el Juez de Menores. Se trata de una de las medidas más leves del amplio catálogo legal y resulta adecuada para menores sin antecedentes, responsables de hechos de poca trascendencia, ya que resulta poco efectiva para menores que ya han pasado por un proceso o son reincidentes⁵⁷.

⁵⁵ CERVELLÓ DONDERIS, V., y COLÁS TURÉGAÑO, A., *La responsabilidad penal del menor*, Tecnos, Madrid, 2002, p.162.

⁵⁶ GÓMEZ RIVIERO, M.C., «La nueva responsabilidad penal del menor: las LO 5/2000 y 7/2000», en *Revista Penal*, nº9, 2002, p.18.

⁵⁷ COLÁS TURÉGAÑO, A., *Derecho penal de menores*, cit., p. 241.

VIII. ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS EN CUANTO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS

Vamos a analizar las diferentes variables que dan lugar a la imposición de una medida judicial por parte de los Jueces de Menores cuando un menor ha sido condenado por sentencia firme a lo largo de los años 2013 a 2018, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, concretamente Aragón.

1. Evolución de los menores condenados en España y Aragón (2013-2018)

Menores condenados en España				Menores condenados en Aragón		
Año	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
2013	14.744	11.988	2.756	303	248	55
2014	15.048	12.147	2.901	274	216	58
2015	13.981	11.141	2.840	231	189	42
2016	12.928	10.346	2.582	250	211	39
2017	13.643	10.819	2.824	313	261	52
2018	13.664	10.753	2.911	316	251	65

Tabla I: Menores (de 14 a 17 años) condenados por sentencia firme según sexo

Fuente: Explotación del INE del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal

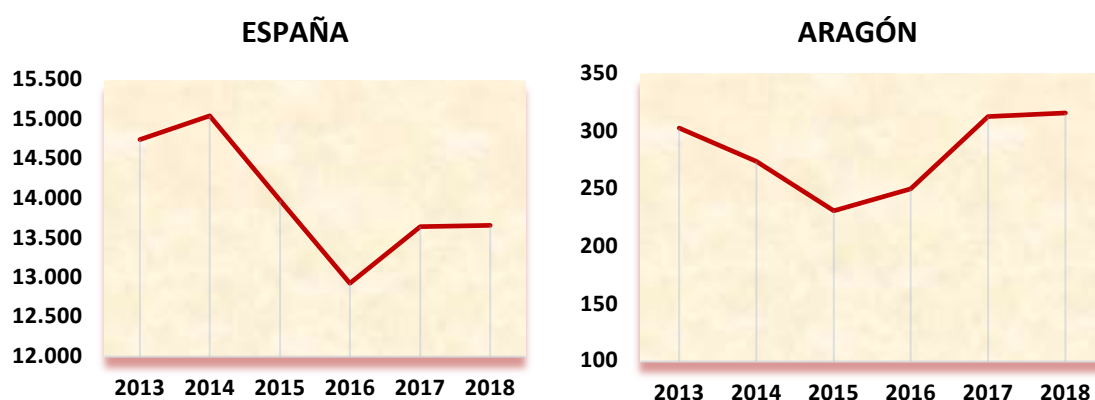


Gráfico I: Evolución de menores condenados en España y Aragón

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

En España, en el año 2014 se condenaron a 15.048 menores, lo que supuso un aumento del 2,1% respecto al año anterior. En los dos años posteriores, las condenas experimentaron un considerable descenso, en 2015, los jueces condenaron a 13.981 menores, supuso un descenso del 7,1% y en 2016, se condenaron a 12.928 menores, lo que también supuso un descenso del 7,5%, todo ello teniendo en cuenta los valores del año anterior. En el año 2017, se condenaron a 13.643 menores, volviendo a incrementarse en un 5,5% y en el 2018, fueron 13.664 condenados, prácticamente sin variación respecto al año anterior (>0,2%).

En Aragón, en el tramo de 2013 a 2015, las condenas disminuyeron, concretamente en el año 2014 se condenaron a 274 menores, suponiendo un descenso del 9,6% y en el año 2015 se condenaron a 231 menores, descendiendo en un 15,7%, todo ello respecto a los años anteriores. Ya a partir del año 2016, las condenas aumentan, en ese año se condenan a 250 menores, lo que supuso un aumento del 8,2%, en 2017, se condenan a 313 menores, incrementándose en un 25,2% y en 2018, los valores se mantienen prácticamente idénticos, con 316 condenados (>1%).

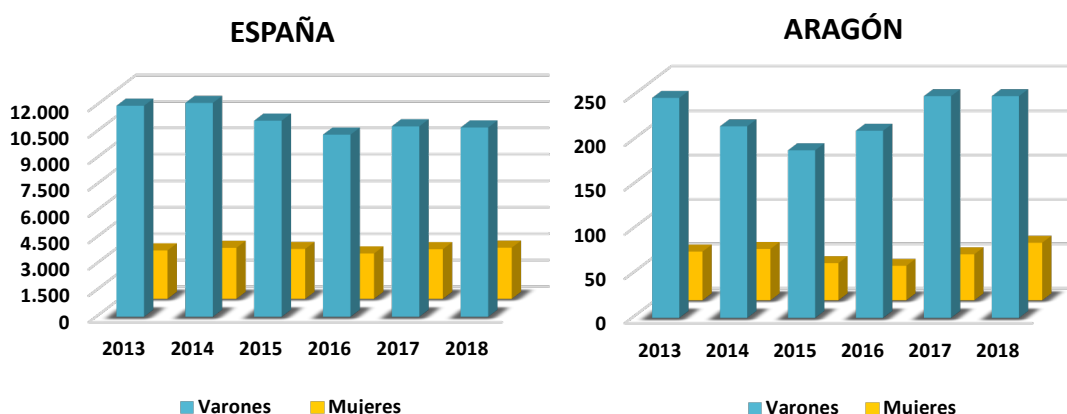


Gráfico II: Evolución según sexo de menores condenados en España y Aragón
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

De igual modo, podemos observar la gran diferencia que existe en función del sexo del menor infractor, siendo mucho mayor el número de varones que delinquen respecto de las mujeres.

Si observamos el año 2018, en España, el 78,7% de los menores condenados fueron varones y el 21,3% mujeres. Teniendo en cuenta los datos del año anterior, supuso un descenso del 0,6% en varones y un aumento del 3,1% en mujeres. En el mismo año en Aragón, el 79,4% de los menores condenados fueron varones, mientras que el 20,6% fueron mujeres, lo que supuso un descenso del 3,8% en varones y un aumento del 25% en las mujeres respecto del año anterior.

2. Tipología y evolución de las infracciones penales cometidas por menores en España y Aragón (2013-2018)

	ESPAÑA	ARAGÓN
2013	25.814	593
2014	25.717	531
2015	24.005	509
2016	21.986	513
2017	23.050	635
2018	24.340	600

Tabla II: Infracciones penales de los menores

Fuente: Explotación del INE del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal

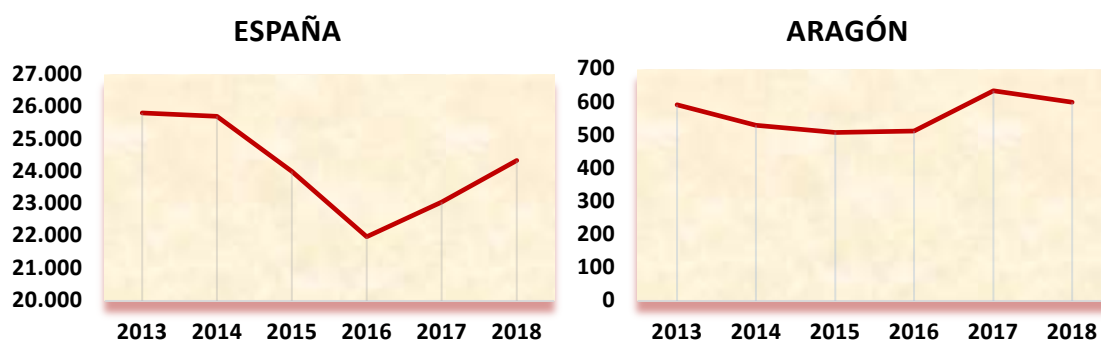


Gráfico III: Evolución de infracciones penales en España y Aragón

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Podemos apreciar que en el tramo de 2013 a 2016, las infracciones penales en España fueron disminuyendo progresivamente, pero en el año 2017 aumentaron un 4,8%

y en 2018, se produjo un aumento del 5,6%, todo ello respecto al año anterior. Aragón también sufrió un descenso en las infracciones penales en el mismo tramo de 2013 a 2016, en el año 2017 aumentaron un 23,8% pero en 2018 volvieron a descender un 5,5%.

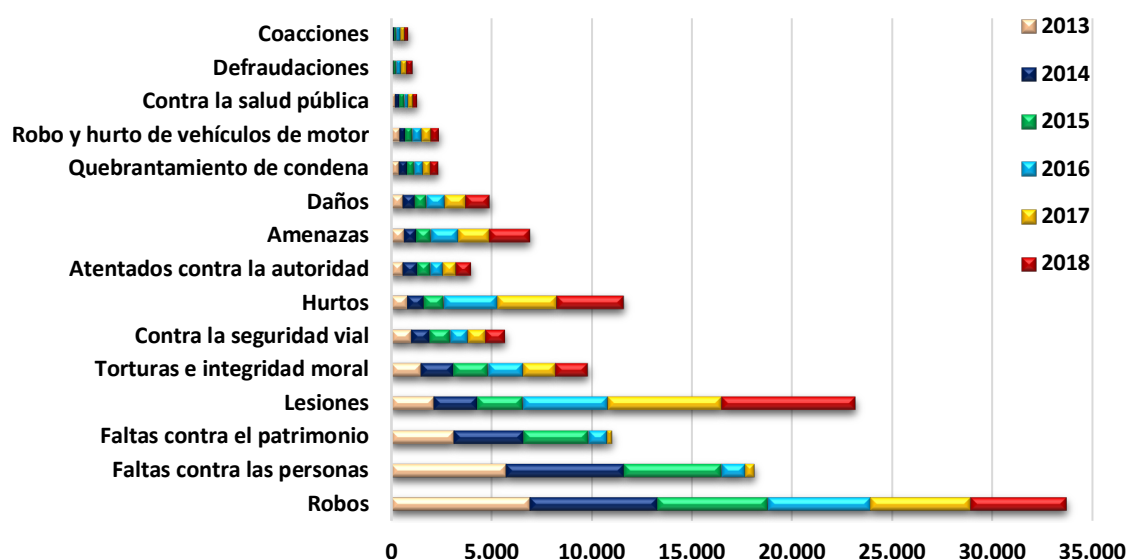


Gráfico IV: Evolución de las infracciones penales a nivel nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Los delitos de mayor incidencia a nivel estatal fueron los robos, los delitos de lesiones, los delitos de torturas y contra la integridad moral y los hurtos. Entre las faltas, las más frecuentes fueron las realizadas contra las personas y contra el patrimonio.⁵⁸ Si analizamos los datos, los robos han ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años, pasando de un 41,6% en 2013 a un 19,7% en 2018; sin embargo, el delito de lesiones ha ido aumentando, pasando de un 12,9% en 2013 a un 27,5% en 2018. En los dos últimos años, el delito de lesiones ha sido el más cometido por los menores y no el delito de robo. También, hay que destacar que el delito de hurto ha ido en aumento pasando de un 5% en 2013 a un 13,8% en 2018.

No hay datos registrados en el INE sobre la tipología delictiva cometida por los menores en Aragón.

⁵⁸ En julio de 2015 entró en vigor la reforma del CP que suprimió las faltas, convirtiéndolas en delitos leves. Seguirán figurando faltas en años sucesivos mientras sigan registrándose infracciones penales cometidas antes de la entrada en vigor de la citada reforma.

3. Evolución de las medidas adoptadas en España (2013 a 2018)

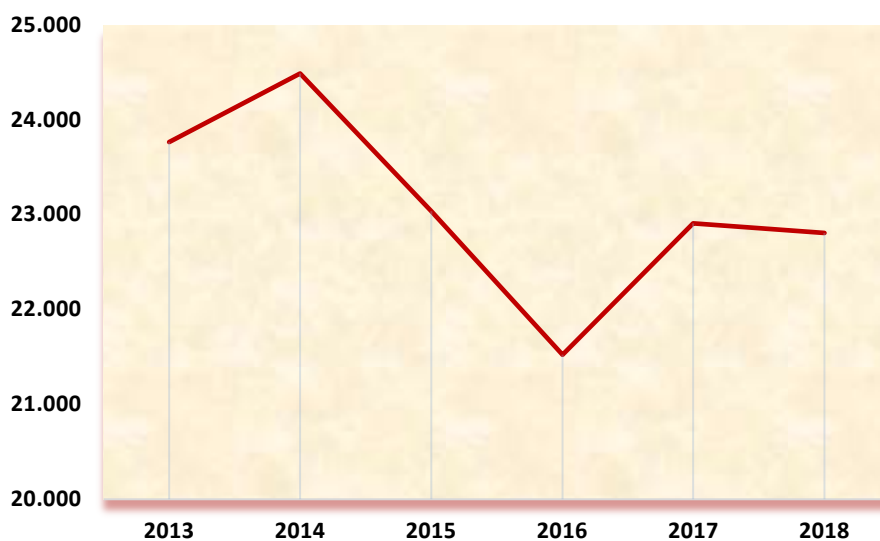


Gráfico V: Evolución de medidas adoptadas en España entre 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

En el año 2014, se adoptaron 24.496 medidas, lo cual supuso un aumento del 3% respecto al año anterior. En los dos años posteriores, las medidas experimentaron un considerable descenso, en 2015, los jueces adoptaron 23.041 medidas, suponiendo un descenso del 5,9% y en 2016, se adoptaron 21.526 medidas, lo que también supuso un descenso del 6,6%, todo ello respecto al año anterior. En el año 2017, se adoptaron 22.916 medidas, volviendo a incrementarse un 6,5% y ya en el 2018, se adoptaron 22.812, suponiendo un descenso del 0,5%.

En el posterior gráfico VI podemos ver el número de medidas de cada clase que han sido impuestas en el periodo 2013-2018 en España. De entre todas las medidas aplicadas, sobresale por encima de las demás la medida de libertad vigilada, le sigue la prestación en beneficio de la comunidad, el internamiento semiabierto y la realización de tareas socio-educativas.

El internamiento en régimen semiabierto es el más aplicado de sus cuatro modalidades y llama la atención que el régimen cerrado, a pesar de ser el más grave y reservarse a los supuestos de mayor gravedad, se ha aplicado más que el internamiento en su modalidad abierta, de escasa aplicación práctica.

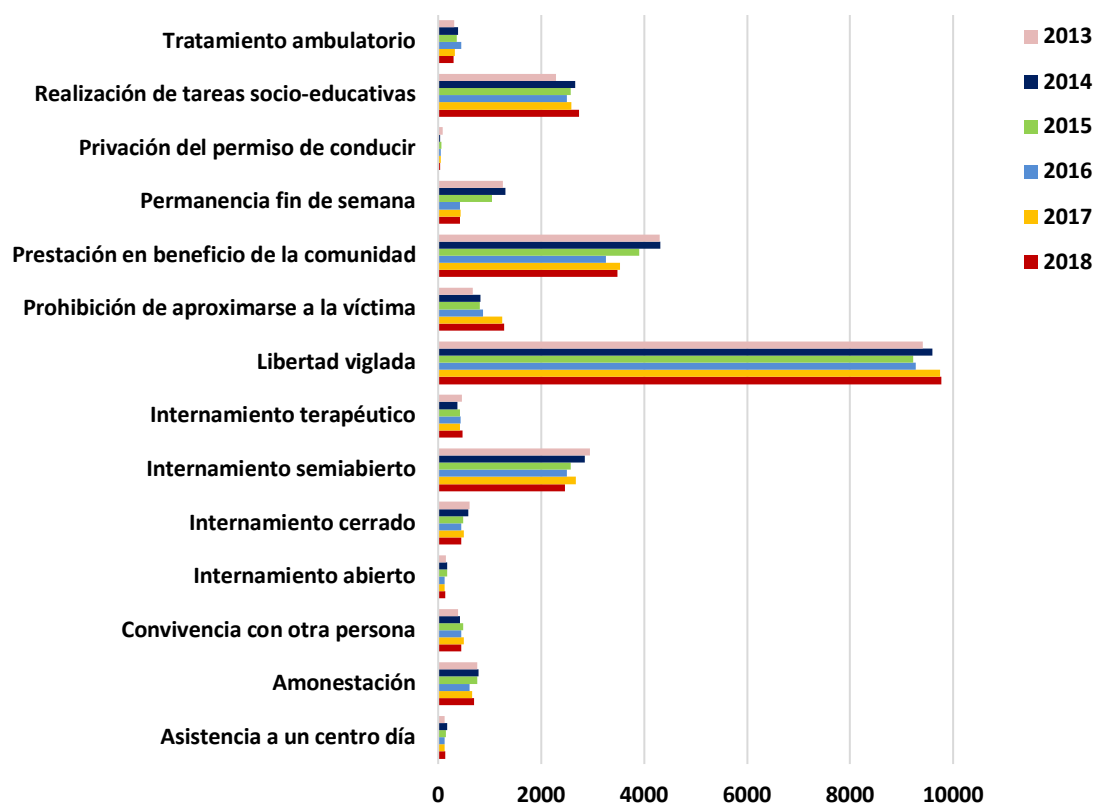
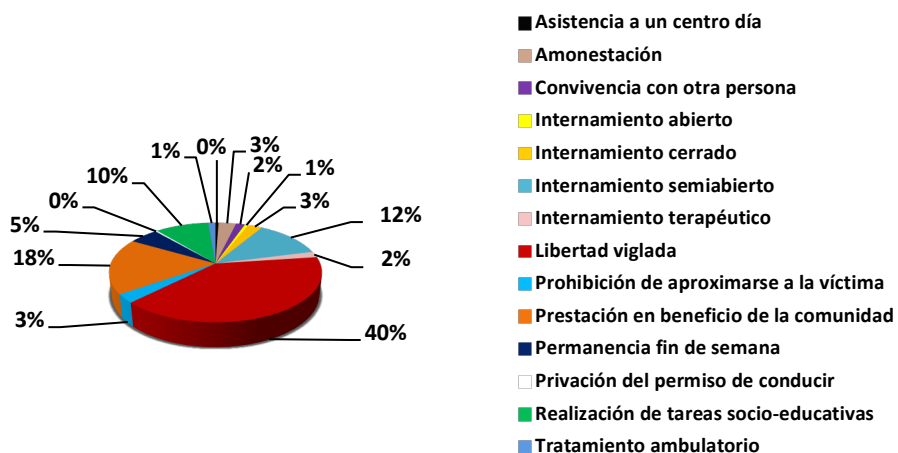


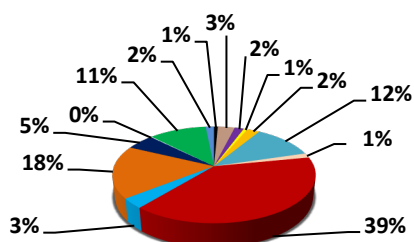
Gráfico VI: Evolución de medidas adoptadas a nivel nacional desde 2013 a 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

4. Medidas adoptadas en España de 2013 a 2018

2013

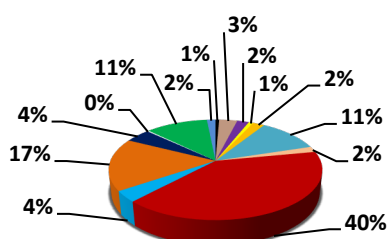


2014



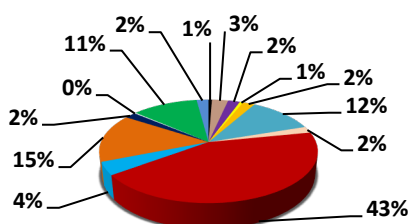
- Asistencia a un centro día
- Amonestación
- Convivencia con otra persona
- Internamiento abierto
- Internamiento cerrado
- Internamiento semiabierto
- Internamiento terapéutico
- Libertad vigilada
- Prohibición de aproximarse a la víctima
- Prestación en beneficio de la comunidad
- Permanencia fin de semana
- Privación del permiso de conducir
- Realización de tareas socio-educativas
- Tratamiento ambulatorio

2015



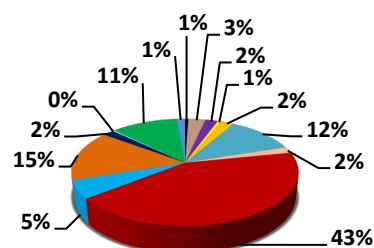
- Asistencia a un centro día
- Amonestación
- Convivencia con otra persona
- Internamiento abierto
- Internamiento cerrado
- Internamiento semiabierto
- Internamiento terapéutico
- Libertad vigilada
- Prohibición de aproximarse a la víctima
- Prestación en beneficio de la comunidad
- Permanencia fin de semana
- Privación del permiso de conducir
- Realización de tareas socio-educativas
- Tratamiento ambulatorio

2016



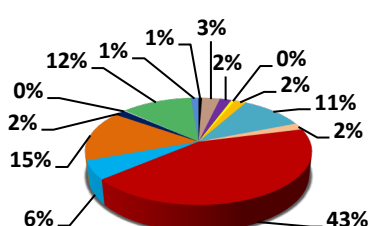
- Asistencia a un centro día
- Amonestación
- Convivencia con otra persona
- Internamiento abierto
- Internamiento cerrado
- Internamiento semiabierto
- Internamiento terapéutico
- Libertad vigilada
- Prohibición de aproximarse a la víctima
- Prestación en beneficio de la comunidad
- Permanencia fin de semana
- Privación del permiso de conducir
- Realización de tareas socio-educativas
- Tratamiento ambulatorio

2017



- Asistencia a un centro día
- Amonestación
- Convivencia con otra persona
- Internamiento abierto
- Internamiento cerrado
- Internamiento semiabierto
- Internamiento terapéutico
- Libertad vigilada
- Prohibición de aproximarse a la víctima
- Prestación en beneficio de la comunidad
- Permanencia fin de semana
- Privación del permiso de conducir
- Realización de tareas socio-educativas
- Tratamiento ambulatorio

2018



- Asistencia a un centro día
- Amonestación
- Convivencia con otra persona
- Internamiento abierto
- Internamiento cerrado
- Internamiento semiabierto
- Internamiento terapéutico
- Libertad vigilada
- Prohibición de aproximarse a la víctima
- Prestación en beneficio de la comunidad
- Permanencia fin de semana
- Privación del permiso de conducir
- Realización de tareas socio-educativas
- Tratamiento ambulatorio

Gráfico VII: Medidas adoptadas en España entre 2013- 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Las medidas adoptadas más frecuentes fueron la libertad vigilada (39-43% del total), la prestación en beneficio de la comunidad (15-18%), internamiento semiabierto (11-12%) y la realización de tareas socio-educativas (10-12%). Podemos observar cómo la aplicación de la medida de permanencia fin de semana ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pasando de un 5% en el año 2013 a un 2% en 2018. También, hay que mencionar que la prohibición de aproximarse a la víctima ha aumentado de un 3% en el año 2013 a un 6% en 2018. El resto de las medidas son de escasa aplicación práctica.

Si tenemos en cuenta sólo los internamientos, el régimen semiabierto es el que sobresale con un 70-72% en su aplicación, seguido del régimen cerrado con un 13-15%, el internamiento terapéutico con un 9-13% y en última instancia, el régimen abierto con un 3-5%.

5. Evolución de medidas adoptadas en Aragón (2013 a 2018)

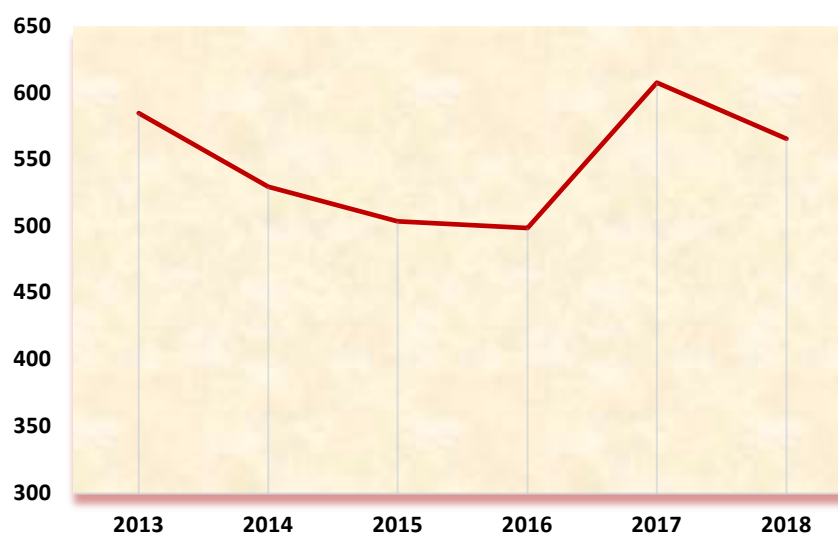


Gráfico VIII: Evolución de medidas adoptadas en Aragón entre 2013- 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

En el gráfico VIII podemos observar cómo a lo largo de los años referenciados, ha ido disminuyendo la cantidad de medidas adoptadas, pero en el tramo de 2016 a 2017, hay un aumento considerable de las mismas.

En el año 2014, se adoptaron 530 medidas, lo cual supuso un descenso del 9,4% respecto al año anterior. En 2015, se adoptaron 504 medidas, y también supuso un descenso del 4,9%. En 2016, se aplicaron 499 medidas, disminuyendo en 1%. En el año 2017, se aplicaron 608 medidas, incrementando su adopción, concretamente en un 21,8% y ya en el 2018 disminuyó su aplicación en 566 medidas, lo que supuso un descenso del 9,5%.

En el gráfico IX podemos ver el número de medidas de cada clase que han sido impuestas en el periodo 2013-2018 en Aragón. De entre todas las medidas aplicadas, sobresale la de libertad vigilada, le sigue la prestación en beneficio de la comunidad e internamientos.

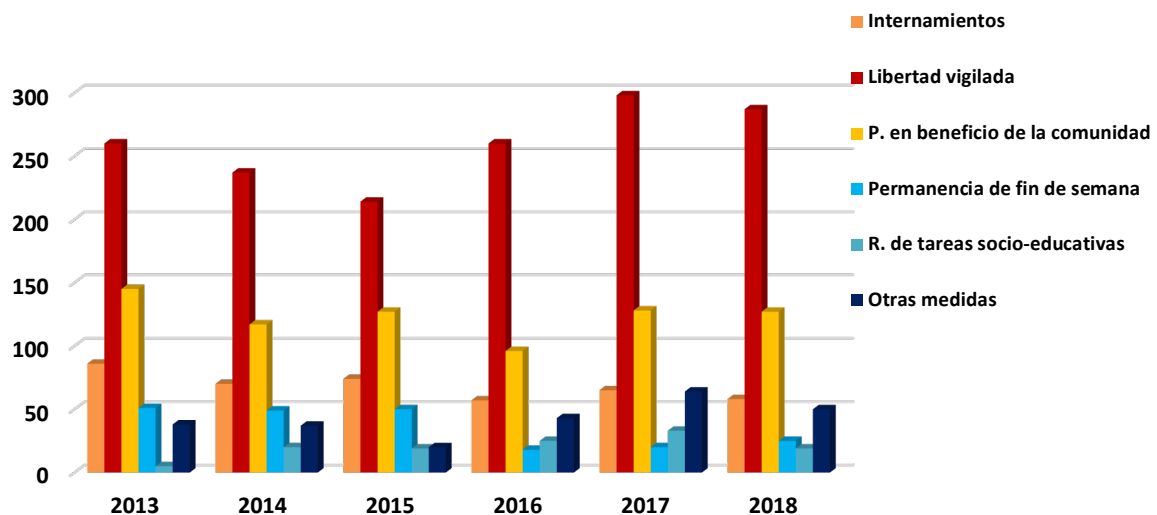


Gráfico IX: Evolución de medidas adoptadas en Aragón desde 2013 a 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

6. Medidas adoptadas en Aragón en el periodo de 2013 a 2018

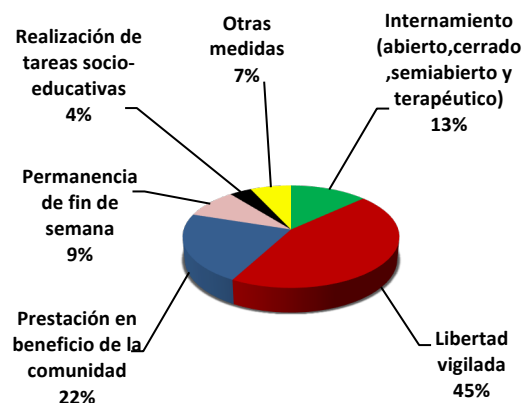
Se puede observar en el gráfico X, que casi la mitad del total de las medidas impuestas son de libertad vigilada (42-52%), representando asimismo porcentajes relevantes las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad (19-25%), la de internamiento (10-15%), y la permanencia de fin de semana (3-10%), siendo el resto de las medidas de escasa aplicación práctica.

Podemos apreciar cómo a lo largo de los años han ido aumentando la realización de tareas socio-educativas (de 1 a 5%) aunque en 2018 se han reducido en 2 puntos. A su vez, hay que destacar el descenso de la aplicación de la medida de permanencia en fin de semana en el tramo de 2015 a 2016, que paso de un 10% a 4% y los internamientos que han pasado de un 15% en 2013 a un 10% en 2018.

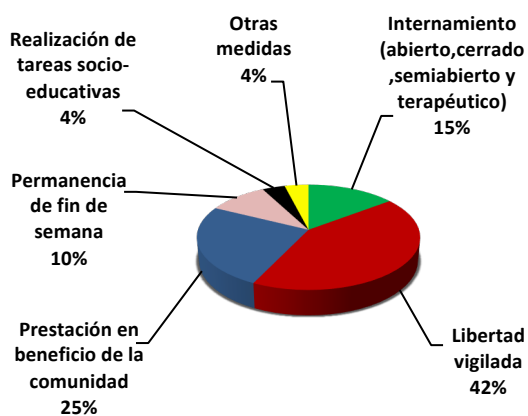
2013



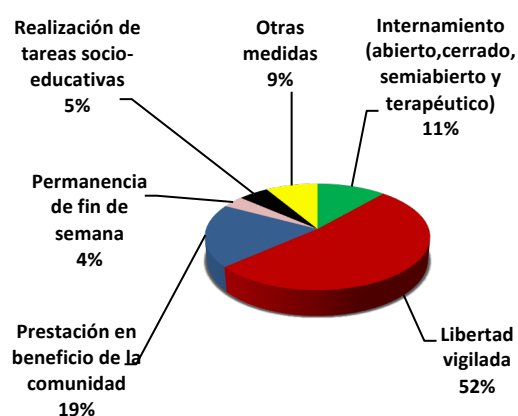
2014



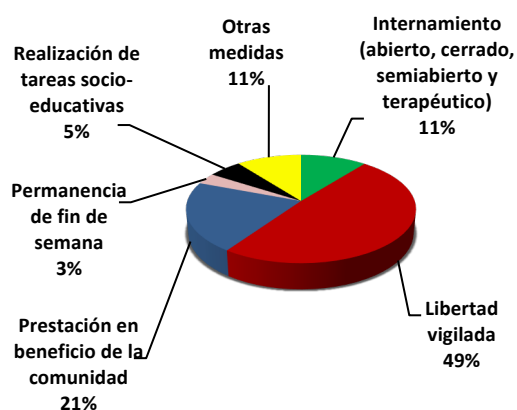
2015



2016



2017



2018



Gráfico X: Medidas adoptadas en Aragón de 2013 a 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

A partir del año 2016, el INE ha desglosado más minuciosamente las diferentes medidas impuestas a los menores, contabilizando individualmente cada internamiento, en sus diferentes modalidades: abierto, cerrado, semiabierto y terapéutico. Además, indica el resto de las medidas que, hasta entonces, se encuadraban en la sección de “Otras medidas”: asistencia a un centro de día, amonestación, convivencia con otra persona, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, privación del permiso de conducir y tratamiento ambulatorio.

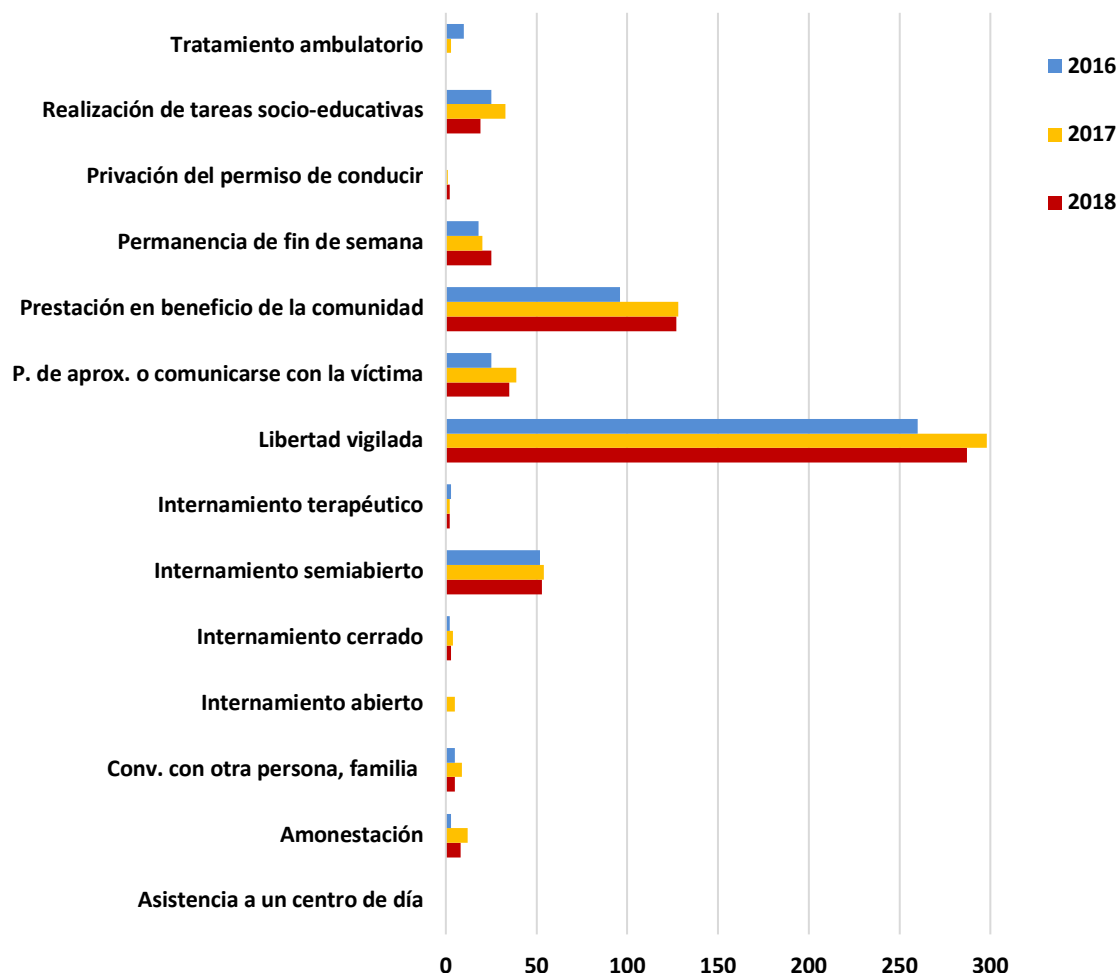


Gráfico XI: Medidas adoptadas en Aragón de 2016 a 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

En el gráfico XII podemos observar como se desglosan los distintos internamientos, siendo el semiabierto el internamiento más adoptado (83-91%). El internamiento cerrado (4-6%) y el internamiento terapéutico (3-5%) se han mantenido prácticamente en los mismos valores a lo largo de estos tres años. Al igual que a nivel nacional, llama la atención que el internamiento en régimen cerrado se aplique en más ocasiones que el régimen abierto, ya que en los años 2016 y 2018 no hubo ningún internamiento en esta modalidad, sólo se adoptó en el año 2017 (8%).

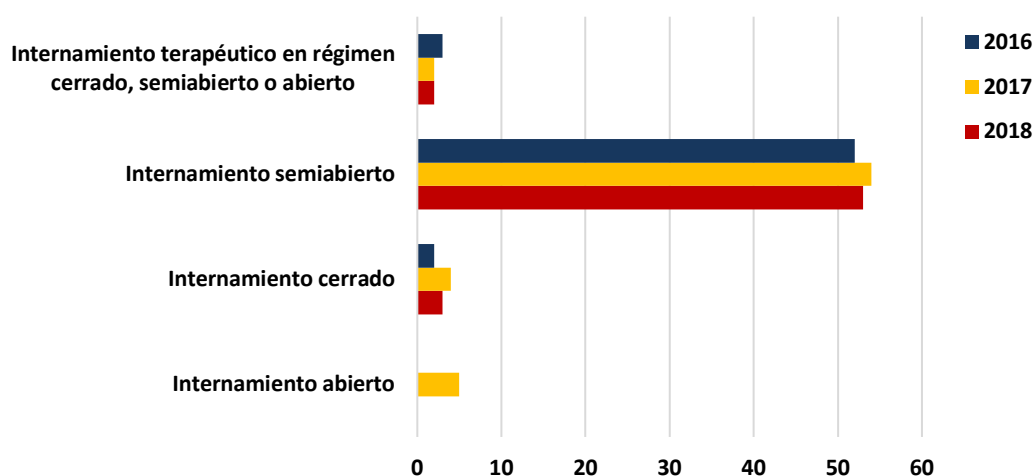


Gráfico XII: Internamientos desglosados de 2016 a 2018 en Aragón
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

IX. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA JURISPRUDENCIA CON RESPECTO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

El apartado segundo del artículo 8 de la LORPM establece la imposibilidad de adoptar una medida privativa de libertad más gravosa que la que le hubiera correspondido en caso de ser mayor de edad. Este límite a la duración de las medidas opera independientemente de la acusación, impidiendo con ello tratar al menor con mayor severidad que si fuera adulto, en el caso de ilícitos idénticos. En este artículo puede parecer que el principio de proporcionalidad opera en exclusividad sobre las medidas privativas de libertad y no sobre el resto. Sin embargo, la aplicación de los límites derivados del principio de proporcionalidad debe mantenerse con todas las medidas, dada su importancia como garantía de seguridad jurídica y la preservación del interés superior

del menor⁵⁹. Según MONTERO HERNANZ, muchos autores como ABEL SOUTO, JERICÓ OJER y CERVELLÓ DODERIS son partidarios de no limitar su aplicación solamente a las medidas privativas de libertad⁶⁰. También para BOLDOVA PASAMAR esta restricción se podría extender en virtud de una analogía *in bonam partem* respecto de las demás medidas que tienen su paralelo en el CP, como las prestaciones en beneficio de la comunidad, privación del permiso de conducir y la inhabilitación absoluta, «pues no hay que olvidar que en el espíritu de la Ley anida la idea coherente con el interés superior del menor de que, en ocasiones, excepcionalmente, al menor se le puede exigir tanta responsabilidad penal como al adulto, pero no más». Sin embargo, entiende que cuando deben compararse dos sanciones «de contenido diverso, al no existir pautas para establecer equivalencias entre las medidas y las penas, en principio la duración de la medida puede ser superior a la de la pena del CP, aunque en los supuestos en los que se dedujeran grandes diferencias de tiempo, el juez debería llevar a cabo una ponderación con el objeto de evitar un posible efecto aflictivo superior para el menor que para el adulto»⁶¹.

En contra se sitúa la FGE, para quien este límite solo opera sobre las medidas de internamiento (incluido el terapéutico) y de permanencia de fin de semana, pudiendo las restantes medidas tener una duración mayor que la de la pena privativa de libertad asignada al adulto que hubiese cometido el mismo delito⁶².

La doctrina establecida por la STC 36/1991, de 14 de febrero, «junto con la necesaria flexibilidad de que ha de disponer el Juez en la apreciación de los hechos y de su gravedad, también es preciso que se sujete a determinados principios que operan como límites a esa discrecionalidad, reconocidos en algunos casos en la propia LTTM -las medidas impuestas no pueden exceder de la mayoría de edad civil-, y en otros implícitos

⁵⁹ JERICÓ OJER, L., «El impacto (probablemente no previsto) de la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en el Derecho penal de menores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 20-24, 2018, pp.21-22.

⁶⁰ MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores...*, cit., pp.360-361.

⁶¹ BOLDOVA PASAMAR, M.A.: «Principales aspectos sustantivos del nuevo Derecho penal juvenil español». El nuevo Derecho penal juvenil: Jornadas sobre la nueva ley penal del menor, coord. Boldova Pasamar (ed.) en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública*, nº5, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2002, p.58 y GARCÍA PÉREZ, O., «La contribución de la jurisprudencia al endurecimiento de la respuesta a los menores infractores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 21-25, 2019, p.3.

⁶² Apartado V.2, principio acusatorio de la Circular 1/2000, de 18 de diciembre, sobre criterios de aplicación de la LORPM,

en la imposición de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, como son la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la medida impuesta o la imposibilidad de establecer medidas más graves o de una duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si de un adulto se tratase» (continuidad de la STC 61/1998, de 17 de marzo).

Existe jurisprudencia que está de acuerdo en que el apartado segundo del artículo 8 de la LORPM sólo se aplique a las medidas privativas de libertad: la SAP de Madrid nº 7532/2005 (Sección 4ª), de 21 de junio, impone la medida de asistencia a centro durante 8 meses por la tentativa de robo de uso de vehículo; señalando posteriormente «sin que sea de aplicación el párrafo segundo del artículo 8 mencionado, ya que se refiere a las medidas privativas de libertad, entre las que no se encuentra la medida de índole educativa impuesta». También la SAP de Barcelona nº 63/2010 (Sección 3ª), de 13 de enero, impone la medida de internamiento en su modalidad de semiabierto durante 6 meses seguida de la medida de libertad vigilada por otros 6 meses, por una tentativa de robo con fuerza en las cosas, manifestando que «teniendo en cuenta que el art. 8 de la LORPM se refiere a las medidas privativas de libertad contempladas en el art. 7.1 a), b), c), d) y g) del art. 7.1, es decir, internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto, internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto, y permanencia de fin de semana, solo debe tenerse en cuenta la medida de internamiento en régimen semiabierto, pero no la de libertad vigilada, sin que la primera supere la pena prevista en el art. 240, en relación con el art. 62, ambos del CP».

Sin embargo, en cuanto a la aplicación del precepto a todas las medidas, la SAP de Álava nº 477/2009 (Sección 2ª), de 10 de junio, impone la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad durante 50 horas por una falta de lesiones y señala que «aunque esta norma se refiere a las medidas privativas de libertad, entendemos que debe extenderse igualmente a todas las medidas, sean o no privativas de libertad, aunque tal criterio se puede matizar en ocasiones, porque no se puede establecer un término de comparación entre una medida y la pena que refleja un tipo para una determinada conducta antijurídica, si bien podemos añadir que para verificar tal comparación pueden servir de referencia las previsiones contenidas en el CP con relación a la gravedad de las

penas». En este mismo sentido argumentan la SAP de Álava nº911/2010 (Sección 2ª), de 7 de abril, la SAP de Burgos nº 858/2011 (Sección 1ª), de 7 de octubre, la SAP de Las Palmas de Gran Canaria nº 1726/2015 (Sección 1ª), de 10 de julio y la SAP de Álava nº112/2019 (Sección 2ª), de 9 de enero.

El principio de proporcionalidad es muy importante en cuanto al límite que tiene con respecto a la imposición de medidas privativas de libertad en los delitos leves. En 2015 prácticamente se eliminó la pena de localización permanente en el CP, lo que tuvo grandes repercusiones en la LORPM. Como la mayoría de los delitos leves ya no llevan aparejada esta pena, sino una multa, ya no se les puede aplicar una medida privativa de libertad a los menores infractores. Es decir, no se les puede imponer la medida de permanencia de fin de semana ni tampoco la de libertad vigilada para delitos leves tales como hurto, estafa, apropiación indebida, etc. Sólo se les puede imponer estas medidas en el caso de la comisión de un delito de amenazas, coacciones e injurias o vejación de carácter leve que afecten al ámbito doméstico, ya que para éstos sí se prevé una pena privativa de libertad⁶³.

⁶³ JERICÓ OJER, L., «El impacto (probablemente no previsto) de la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en el Derecho penal de menores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 20-24, 2018, pp.22-23.

X. CONCLUSIONES

1.- No es fácil fijar las causas que conducen a un menor a delinquir, pero podemos señalar algunas de ellas: pertenencia a familias desestructuradas, marginación socioeconómica o pobreza, absentismo y fracaso escolar, desempleo, consumo de drogas y sustancias tóxicas, influencias externas en clave de medios de comunicación, factores inherentes al menor, insuficiencia en la enseñanza y en la transmisión de valores prosociales o cívicos. En la mayoría de los casos no va a ser una sola causa sino un conjunto de ellas las que dan explicación al hecho. La intensidad y cronicidad de estos factores de riesgo suele ser mayor en los reincidentes.

Para prevenir la delincuencia juvenil, las sociedades deben adoptar diversas estrategias que combinen tanto medidas de prevención y de intervención como medidas judiciales o de represión. Las estrategias de prevención e intervención deben encaminarse a socializar e integrar a los jóvenes mediante la familia, comunidad, grupo de iguales, escuela, formación profesional y trabajo. Sin embargo, las medidas de represión tienen que basarse en los principios de inocencia, proporcionalidad y flexibilidad, derecho de defensa, juicio con todas las garantías y respeto a su vida privada. Tanto la elección de la medida y su posterior ejecución como el desarrollo del proceso deberán inspirarse en el principio del interés superior del menor.

2.- El número de menores condenados a nivel nacional se ha ido reduciendo en los últimos años, aunque en el año 2014 hubo un repunte de condenas. La variación entre 2018 y 2013 es de un 7,5% menos de delitos.

Las estadísticas oficiales permiten conocer cómo la criminalidad juvenil es mayoritariamente masculina, aunque podemos observar una tendencia al aumento de la criminalidad femenina.

3.- A nivel estatal, a lo largo de estos años, los delitos más ejecutados por los menores fueron los robos, delitos de lesiones, delitos de torturas y contra la integridad moral y hurtos. Hay que destacar, que el delito de lesiones ha ido aumentando, pasando de un 12,9% en 2013 a un 27,5% en 2018, dato preocupante, porque evidencia un fracaso en la educación del propio sistema social. Por ello, debemos potenciar nuestros centros

educativos, sociales y la familia para lograr reducir la delincuencia juvenil, y para ello, deben coordinarse para configurar programas de políticas de prevención.

4.- El análisis de las medidas judiciales por año nos permite observar la evolución en la aplicación de las distintas medidas. En este sentido, podemos deducir que, tanto en España como en la CCAA de Aragón, hay una clara tendencia a favor de la ejecución de medidas en medio abierto frente a las medidas privativas de libertad, lo que responde a la filosofía y principios educativos de la Ley. Concretamente, la libertad vigilada es la medida más impuesta, en España corresponde entre un 39-43% y en Aragón entre un 42-52%, permite al menor permanecer en su entorno habitual mientras existe un seguimiento intenso de su actividad por personal especializado, acompañado en muchas ocasiones, del cumplimiento de alguna regla de conducta. Le sigue la medida de prestación en beneficio de la comunidad, con un 15-18% en España y un 19-25% en Aragón. Estas medidas se aplican en delitos de menor gravedad y con menores con un mayor grado de integración e inserción social.

Las medidas privativas de libertad son más restrictivas y están indicadas para los delitos más graves. Concretamente, las medidas de internamiento representan un porcentaje relativamente bajo frente al total de las medidas, en especial el internamiento en régimen cerrado, lo que sitúa a España dentro de las previsiones de los estándares internacionales, al preconizar su utilización como último recurso. En este sentido, el internamiento en régimen semiabierto es la medida más adoptada tanto a nivel nacional como en el ámbito aragonés, siendo la tercera medida más adoptada, después de la libertad vigilada y la prestación en beneficio de la comunidad. Llama mucho la atención que el internamiento en régimen cerrado, a pesar de ser la medida más grave, se ha aplicado más que el internamiento en régimen abierto.

Otras medidas como la asistencia a un centro de día, amonestación, convivencia con otra persona, la privación de determinados permisos y el tratamiento ambulatorio, son de escasa aplicación práctica.

5.- El planteamiento de la LORPM basado en el uso de un amplio abanico de medidas educativas parece dar una respuesta efectiva a la mayoría de los jóvenes que

inician su trayectoria cometiendo delitos de menor gravedad. Se les aplican medidas de carácter leve, ejecutadas en medio abierto, observando una evolución más positiva tanto en el logro de objetivos educativos como en la menor reincidencia, logrando su reinserción. Uno de los aspectos que debe potenciarse es la intervención en el ámbito familiar y comunitario del menor durante la ejecución de la medida, para lograr una adecuada integración psicosocial del joven.

Existen casos puntuales de graves delitos cometidos por menores que generan una gran alarma social e inseguridad y que son tratados de manera sensacionalista debido a la focalización por los medios de comunicación. En estos casos, las medidas sancionadoras no tienen comparación con las que se impondrían en el caso de que fuesen adultos. Es por ello, que la sociedad tiene una imagen distorsionada de la LORPM y tiende a pensar que es ineficaz y excesivamente indulgente con el infractor, ya que las medidas que se toman no son efectivas, reivindicando con frecuencia su endurecimiento y la disminución de la edad penal como vía preventiva. Esta percepción ha generado un debate social y político sobre la adecuación de las medidas en toda la UE, donde en algunos países se han adoptado reformas en dicha línea, como es el caso de España, aproximando el Derecho penal de menores a un Derecho penal sancionador retributivo.

La aplicación de la LORPM es muy efectiva para una gran mayoría de los casos, pero en los casos más graves, las medidas más privativas no obtienen resultados tan positivos, por lo que insistir en ellas o alargarlas, no parece que vaya a mejorar su efectividad o garantizar la reinserción social del menor, por lo que sería preciso extender la intervención a otros contextos como el familiar y social, para potenciar sus recursos de apoyo. Además, se debe incrementar el apoyo comunitario, pues proporciona los recursos para desarrollar intervenciones educativas extrajudiciales más eficaces. Por tanto, el debate debe dirigirse hacia la adecuación de ese pequeño porcentaje de menores infractores que cometen delitos de mayor gravedad y no hacia el planteamiento global de la Ley. Las futuras modificaciones de la LORPM deberían realizarse en base a evaluaciones e investigaciones y no en respuesta a la presión de la opinión pública ante unos hechos puntuales.



6.- En referencia a la duración de las medidas del artículo 8.2 de la LORPM, aunque la norma se refiere textualmente a las medidas privativas de libertad, debe entenderse que debe extenderse a todas las medidas, ya sean o no privativas de libertad, así la STC 36/91, de 14 de febrero, avala esta postura, expresando sin distinción la «imposibilidad de establecer medidas más graves o de una duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si de un adulto se tratase». En todos los ámbitos del derecho sancionatorio tiene una gran virtud el principio de proporcionalidad, también referenciado en la LORPM en sus artículos 7.3, 8.2 y 39.1, al referirse a la necesidad de valorar la gravedad de los hechos y siempre estrechamente ligado al interés superior del menor.



XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

BOLDOVA PASAMAR, M.A., *El Sistema de aplicación de las sanciones en el Derecho penal de los menores tras la LO 8/2006, de 4 de diciembre*, en Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (eds.), *Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar, ¿Qué hacer con los menores delincuentes?*, Atelier, Barcelona, 2007.

CERVELLÓ DONDERIS, V., y COLÁS TURÉGANO, A., *La responsabilidad penal del menor*, Tecnos, Madrid, 2002.

COLÁS TURÉGANO, A., *Derecho penal de menores*, Tirant lo Blanch, Valencia 2011.

FEIJOO SÁNCHEZ, B., DÍAZ MAROTO VILLAREJO, J. y POZUELO PÉREZ, L., *Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Thomson-civitas, Cizur Menor, Navarra, 2008.

FERNÁNDEZ MOLINA, E. y BERNUZ BENEITEZ, M.J., *Justicia de Menores*, Síntesis, Madrid, 2018.

GONZÁLEZ TASCÓN, M., *El tratamiento de la delincuencia juvenil en la UE. Hacia una futura política común*, Lex Nova, Valladolid, 2010.

LANDROVE DÍAZ, G., *Introducción al Derecho penal de menores*, 2ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

LUZÓN PEÑA, D.M., *Lecciones del Derecho penal. Parte General*, 2ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª edic., Reppertor, Barcelona, 2011.

MONTERO HERNANZ, T., *La privación de libertad de menores y los estándares internacionales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2018.

MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte General*, 8ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

ORNOSA FERNÁNDEZ, M.R., *Derecho penal de menores*, 4ª edic., Bosch, Barcelona, 2007.

ORTEGA NAVARRO, R.C., *El Régimen Jurídico del menor privado de libertad en los centros de internamiento de menores infractores*, Thomsonreuters Aranzadi, Navarra 2018.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., *El sistema de medidas en la ley penal del menor y las alternativas al proceso*, Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar: ¿qué hacer con los menores delincuentes?, coord. Jorge Barreiro y Feijoo Sánchez, Barcelona, 2007.

SILVA SANCHEZ, J.M., *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*, 2ª edic., B de F, Buenos Aires, 2010.

ZARATE CONDE, A. y GONZÁLEZ CAMPO, E., *Derecho penal. Parte General*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2019.

REVISTAS

ALASTUEY DOBÓN, M.C., «Alternativas al procedimiento y a la ejecución de las medidas en la LORPM», coord. Boldova Pasamar (ed.), El nuevo Derecho penal juvenil: Jornadas sobre la nueva ley penal del menor, en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública*, nº 5, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2002, pp.19-218

BARQUÍN SANZ, J. y CANO PAÑOS, M.A., «Justicia penal juvenil en España: una legislación a la altura de los tiempos», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª Época, nº 18, 2006, pp.37-95.

BLANCO BAREA, J.A., «Responsabilidad penal del menor: Principios y medidas judiciales aplicables en el Derecho penal español», en *Revista de Estudios Jurídicos*, 2ª Época, nº8, 2008, pp.1-28.

BOLDOVA PASAMAR, M.A.: «Principales aspectos sustantivos del nuevo Derecho penal juvenil español». El nuevo Derecho penal juvenil: Jornadas sobre la nueva ley penal del menor, coord. Boldova Pasamar (ed.) en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública*, nº5, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2002, pp.39-70.

BRAVO, A., SIERRA, M.J. y DEL VALLE, J.F., «Evaluación de resultados de la LORPM. Reincidencia y factores asociados», en *Revista Psicothema*, vol.21, nº 4, 2009, pp.615-621.

GARCÍA, M.D., MARTÍN, E., TORBAY, A. y RODRÍGUEZ, C., «La valoración social de la LORPM», en *Revista Psicothema*, vol. 22, nº 4, 2010, pp.865-871.

GARCÍA PÉREZ, O., «La reforma de 2006, de la responsabilidad penal de los menores: la instrucción del modelo de seguridad ciudadana», en *Revista de política-criminal*, A 1-5, nº5, 2008, pp.1-31.

GARCÍA PÉREZ, O., «La contribución de la jurisprudencia al endurecimiento de la respuesta a los menores infractores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 21-25, 2019, pp.1-44.

GÓMEZ HIDALGO, J.I., «Estudio de las medidas establecidas en la LORPM», en *Revista Jurídica Baylio*, nº4, 2014, pp.1-129.

GÓMEZ RIVIERO, M.C., «La nueva responsabilidad penal del menor: las LO 5/2000 y 7/2000», en *Revista Penal*, nº9, 2002, pp.3-26.

JERICÓ OJER, L., «El impacto (probablemente no previsto) de la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en el Derecho penal de menores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 20-24, 2018, pp.1-56.

JIMÉNEZ DÍAZ, M.J., «Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, nº 17-19, 2015, pp.1-36.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «La reforma de la ley penal del menor por la LO 8/2006», en *Revista Jurídica de Castilla y León*, nº15, 2008, pp.1-35.

SANCHÉZ VÁZQUEZ, V. y GUIJARRO GRANADOS, T., «Apuntes para una historia de las instituciones de menores en España», en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, vol.22, nº 84, 2002, pp.121-138.

SANZ HERMIDA, A.M., «La responsabilidad penal de los menores en derecho español», en *Revista Internacional de Derecho Penal*, vol.75, 2004, pp.293-314.

SOUTO, M.A., «Internamientos penales de menores en la LORMP y su Reglamento de 30 de julio de 2004», en *Anuario de Derecho y Ciencias penales*, vol. LVII, 2004, pp.77-106.

TAMARIT SUMALLA, J.M., «El nuevo derecho penal de menores: ¿creación de un sistema penal menor?», en *Revista Penal*, nº 8, 2001, pp.71-89.

LEGISLACIÓN NORMATIVA

Constitución Española.

Resolución 40/43 de 29 de noviembre de 1985, de la A.G. de las Naciones Unidas, Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores. (Reglas de Beijing).

Convención de los Derechos del Niño de 1989.

Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, de la A.G. de las Naciones Unidas, sobre directrices para la prevención de la delincuencia juvenil. (Directrices de Riad).

LO 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento ante los Juzgados de Menores.

Código Penal.

L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Circular 1/2000, de 18 de diciembre, sobre criterios de aplicación de la LORPM.

LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de diciembre, del CP y de la LORPM, en relación con los delitos de terrorismo.

LO 9/2000, de 10 de diciembre, sobre las medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

LO 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la ley 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, y del CC, sobre la sustracción de menores.

LO 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del CP.

RD 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LORPM.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la UE», aprobado el 15 de marzo de 2006.

LO 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LORPM.

LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP.

JURISPRUDENCIA

STC de 14 de febrero, 36/1991(ECLI:ES:TC:1991:36)

SAP Madrid (Sección 4ª), de 21 de junio, 7532/2005 (ECLI:ES:APM:2005:7532)

SAP Álava (Sección 2ª), de 10 de junio, 477/2009 (ECLI:ES:APVI:2009:477)

SAP Barcelona (Sección 3ª), de 13 de enero, 63/2010 (ECLI:ES:APB:2010:63)

SAP Álava (Sección 2ª), de 7 de abril, 911/2010 (ECLI:ES:APVI:2010:911)

SAP Burgos (Sección 1ª), de 7 de octubre, 858/2011 (ECLI:ES:APBU:2011:858)

SJM Valladolid, de 11 de junio, 2104/2014 (ECLI:ES:JMVA:2014:2104)

SAP Guipúzcoa (Sección 1ª), de 13 de marzo, 189/2015 (ECLI:ES:APSS:2015:189)

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Sección 1ª), de 10 de julio, 1726/2015 (ECLI:ES:APGC:2015:1726)

SAP Álava (Sección 2ª), de 9 de enero, 112/2019 (ECLI:ES:APVI:2019:112).

RECURSOS DE INTERNET

Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/> consultado a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2020.

Consejo General del Poder Judicial: <http://www.poderjudicial.es> consultado el día 09/03/2020 y 20/04/2020.

Fiscalía General del Estado: <https://www.fiscal.es/> consultado en el mes de marzo de 2020.

Instituto Nacional de Estadística: <https://www.ine.es/> consultado a lo largo del mes de marzo de 2020.

Ministerio del Interior: <http://www.interior.gob.es/> consultado en el mes de febrero de 2020.

Tribunal Constitucional: <https://www.tribunalconstitucional.es/> consultado en abril de 2020